

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
METROPOLITANA**

AZCAPOTZALCO



Casa abierta al tiempo

**LA ACTUACIÓN DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE DEFENSA
DE LOS DERECHOS HUMANOS FRENTE A LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS SOCIALES.**

**(EL CASO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL
DISTRITO FEDERAL)**

**QUE PRESENTA PARA OBTENER EL TÍTULO
DE LICENCIATURA EN SOCIOLOGÍA**

José Tapia Pérez

Matricula: 92213231

Julio del 2003.

Pobrezas

**Pobres lo que se dice pobres, son
los que no tienen más libertad que la de elegir
entre uno y otro canal de televisión.....**

**Pobres lo que se dice pobres, son los que
siempre son muchos y están siempre solos.....**

**Pobres, lo que se dice pobres, son los que
no saben que son pobres.**

(Eduardo Galeano)

**LA ACTUACIÓN DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE DEFENSA
DE LOS DERECHOS HUMANOS FRENTE A LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS SOCIALES.
(EL CASO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL
DISTRITO FEDERAL)**

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	5
CAPITULO I	
DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS SOCIALES	9
CARACTERÍSTICAS DE LOS DERECHOS HUMANOS	11
CAPITULO II	
DERECHOS SOCIALES EN MÉXICO	20
PRIMER PERIODO	21
SEGUNDO PERIODO	26
OBLIGACIONES DEL ESTADO MEXICANO EN MATERIA DE DERECHOS SOCIALES	34
CAPITULO III	
LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL Y LOS DERECHOS SOCIALES	39
ANTECEDENTES	40
MARCO JURÍDICO	45
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL	47
CAPITULO IV	
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LA LEY DE LA CDHDF PARA HACER EXIGIBLES LOS DERECHOS SOCIALES ANTE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL D.F.	58
CAPITULO V	
CONCLUSIONES	67
ANEXO I GRAFICAS DE INDICADORES NUMÉRICOS DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS SOCIALES EN MÉXICO FRENTE A AMÉRICA LATINA	70
ANEXO II RECOMENDACIONES EMITIDAS DE 1994 AL 2003 POR LA CDHDF	75
ANEXO III NOTA PERIDISTICA DE LA INAUGURACIÓN DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE LA CDHDF	83
BIBLIOGRAFÍA	85

INTRODUCCIÓN

Hace algunos años al ingresar a Dirección General de Educación de la CDHDF, particularmente a la Dirección de Capacitación, debo confesarlo tuve mi primer contacto con el tema de los Derechos Humanos, ya que a lo largo de los estudios Universitarios estos temas no aparecían y no formaban parte de los análisis que hacíamos de movimientos sociales actuales o emergentes, a pesar que este tema se ha generalizado y cada vez más Instituciones lo han tomado como suyo, por tanto, es ya un tema insoslayable para cualquier político o cualquier institución o Estado en los últimos años.

Esta situación permite establecer ciertos elementos a destacar, en primer lugar estos temas ha formado parte de mi a lo largo de los pasados cinco años, por tanto se hizo necesario que fueran el referente de mi investigación para poder obtener el título de licenciado en Sociología y por otro lado, me ha resultado natural (por supuesto por mi formación) que mantenga una visión crítica de las actividades que lleva a cabo una Institución como la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, sobre todo porque con ello me ha permitido proponer la urgente necesidad de mejorarla y superar las grandes acotaciones con las que jurídicamente nació.

En este sentido es de gran importancia que se analice y que mejor desde dentro, a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y proponer ampliar el rango de acción en la protección de los derechos humanos desde una visión más integral, protegiendo derechos tanto de primera generación como de segunda generación.

El tema aquí analizado no es menor, ya que reviste la particularidad de llevar al debate actual la protección de los derechos sociales por parte de instancias creadas para la protección de los derechos humanos y proponer que esta defensa se eleve a rango jurídico, o sea a nivel de una propuesta de modificación

a la Ley de la propia Comisión y cumplir con el fin que tiene, la de la protección, defensa, vigilancia, estudio y difusión de los derechos humanos de la Ciudad más grande del mundo.

En este sentido y como primer paso, el presente ensayo tiene la finalidad de hacer un análisis de dos variables:

- a) Primero, como los derechos sociales en México han servido para legitimar al régimen y,
- b) Segundo, como los derechos sociales han quedado fuera de la protección de los organismos públicos de defensa de los derechos humanos en particular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

Por otro lado, el establecimiento de un nuevo paradigma en nuestro país, *los derechos humanos*, ha provocado una serie de discusiones y debates sobre la pertinencia de la protección de dichos derechos, centrándose sobre todo en la protección de *los derechos fundamentales* (1), dejando de lado *los derechos sociales* (2), ya que se han considerado como secundarios o progresivos y su protección en muchas ocasiones depende de la *progresividad del Estado*(3).

(1) Cuando se habla de derechos fundamentales, muchos autores los refieren a que son derechos inherentes a la dignidad de las personas, en su aspecto individual, tales como el derecho a la vida, a la libertad personal, a la integridad, el derecho al voto, a la igualdad ante la ley, a la libertad de pensamiento, de conciencia y religión. E Incluso hacen una caracterización de estos derechos y los engloban en tres generaciones, siendo la primera generación de derechos humanos como derechos civiles y políticos.

(2) Cuando se habla de derechos sociales, muchos autores los refieren a que son derechos dirigidos a los seres humanos en grupos sociales, o sea en su aspecto social, tales como derecho al trabajo, derecho a la educación, a la tenencia de la tierra, derechos a la protección de la salud, etc.. Estos derechos se caracterizan como derechos de segunda generación y son llamados derechos económicos, sociales y culturales.

(3) En relación a la progresividad del Estado, diversos autores lo caracterizan en el sentido de trasladar cuando existan mejores condiciones la realización de estos derechos, sobre todo basados en establecer mejores condiciones económicas hacia futuro.

La primera parte del presente ensayo tiene la finalidad de hacer un análisis sobre los elementos substanciales del trabajo, en primer lugar se analizará la importancia de los derechos sociales, los autores que los clasifican y conceptualizan, así como la incidencia de dichos derechos en el debate teórico actual; para después analizar el paradigma de los derechos humanos, los teóricos que los estudian y las escuelas que los sustentan.

En este sentido la Hipótesis del presente ensayo es:

“Los derechos sociales, fueron un gran sustento en la legitimidad del Régimen, pero al implementarse un nuevo modelo en los años ochentas, la protección de estos derechos quedó de lado, frente a este hecho histórico como ha actuado la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en la protección de los mismos”.

El segundo capítulo hace una recuperación socio histórica de los derechos sociales durante los años cuarentas hasta los noventas, con la finalidad de analizar como los derechos sociales legitimaron al Régimen y esta situación paulatinamente fue cambiando, hasta establecer un nuevo modelo que dejó de lado la protección de los derechos sociales basándose en otros modelos para su protección.

El tercer capítulo tiene la finalidad de hacer una revisión de cual es el origen de los organismos públicos de derechos humanos, en particular el caso de la CDHDF, las dificultades para su implementación, las limitaciones con las que este organismo público de defensa de los derechos humano ha trabajado, además de sustentar la idea de que la protección de los derechos humanos de la población se ha basado en proteger derechos individuales y dejar de lado la protección de los derechos sociales, confirmando el alejamiento de las Instituciones Públicas en materia de protección de los Derechos Sociales.

EL capítulo cuatro propone una modificación a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en lo referente a la protección de los derechos sociales frente a toda actuación del Gobierno local, logrando con ello, ampliar la competencia de la protección de los derechos sociales, para hacer de la Comisión Local, la primera Institución Pública de Defensa de los Derechos Humanos que lleva a rango jurídico la protección de estos derechos.

Para finalizar, el capítulo cinco tiene por objetivo proponer algunas conclusiones respecto al tema analizado y recuperar algunos puntos básicos para ampliar la protección de los derechos sociales en México, dichas propuestas tienen como objetivo elaborar un marco general y mínimo para que otras instituciones Públicas de defensa de los Derechos Humanos, se incorporen de manera más decidida en la protección de los derechos de manera más integral acordes con la normatividad internacional y la exigencia de la sociedad cada vez más pauperizada.

CAPITULO I

DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS SOCIALES

En la actualidad hablar de Derechos humanos es hacerlo de un tema fundamental, un paradigma de las relaciones entre el Estado y la sociedad. *“Los derechos humanos se han convertido en un referente inexcusable de la modernidad, quizá son su signo distintivo, aquello que da cuenta de la evolución del género humano hacia un estadio de mayor desarrollo y bienestar, que por el momento -sin negar los avances evidentes que se han sucedido- todavía permanece inalcanzado.”* (Carbonell 2001). Según diversos autores no es posible entender a los derechos humanos tal y como los conocemos hoy, de la misma forma que en el pasado, se pueden encontrar algunos antecedentes en los sistemas matriarcales y patriarcales, en las culturas griegas y romanas, en el Derecho Romano por ejemplo, la ley de las doce tablas incluía algunos derechos civiles y políticos, pero no contemplaba formas de oponerse y defenderse de las acciones del Estado.

No es sino hasta la época de los primeros ordenamientos constitucionales en Inglaterra y España en donde se plasman leyes de carácter general que se oponían a los actos de los Estados y particularmente de los reyes, ejemplo de ello es la carta magna Inglesa en donde el rey se comprometió a respetar la propiedad de los hombres libres, a no privarlos de su vida y su libertad.

Por otro lado, la Revolución Francesa de 1789 en su "Declaración de los Derechos del hombre y del ciudadano" comenzó a discutir sobre el respeto a la dignidad del hombre y de sus derechos frente al Estado. (4).

Es importante destacar que a partir de la Revolución Francesa se dio inicio a una protección constitucional de los derechos o garantías con una orientación totalmente liberal y no es sino hasta el siglo XX, en donde aparecen las primeras constituciones donde se protegen los derechos sociales.

Mucha y muy variada es la literatura que versa sobre los derechos humanos, autores como Bobbio han hablado sobre estos temas a lo largo de este siglo, el paradigma de los derechos humanos resurgió al escenario mundial sobre todo después de la Segunda Gran Guerra, el impacto que tuvo en toda la humanidad la muerte de cientos de miles de personas en un gran genocidio, no podía ser otro que la reacción de un amplio y extendido movimiento en defensa de la dignidad humana.

(4) En este punto es importante hacer la acotación que cuando la Declaración Francesa se refiere a los "hombre" no lo hace en forma genérica, sino que expresa la protección de los hombres blancos, propietarios y ciudadanos, por tanto las mujeres, los niños y las niñas y los esclavos estaban mucho de ser protegidos, por lo tanto no era una declaración de carácter general. Si se quiere conocer más sobre este punto se recomienda analizar la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana que Olympe de Gauges escribió como reclamo ante esta grave omisión

CARACTERÍSTICAS DE LOS DERECHOS HUMANOS

Entre las características propias de los Derechos Humanos, tenemos:

Los Derechos Humanos son *innatos o inherentes*; Todas las personas nacemos con derechos que nos pertenecen por nuestra condición de seres humanos. Su origen no es el Estado o las leyes, decretos o títulos, sino la propia naturaleza o dignidad de la persona humana. Por eso cuando una ley viola los derechos humanos se la considera nula (sin valor) porque va contra la misma naturaleza humana.

Los derechos humanos pretenden su *universalidad*, porque se busca que sean un valor de todos los seres humanos sin distinción y para todos los rincones del planeta, y la base normativa de la universalidad de los derechos humanos es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y los diferentes Pactos y Declaraciones de carácter universal, que los Estados han firmado y que se han comprometido a cumplirlos.

Los derechos humanos son *inalienables e intransferibles*; La persona humana no puede, sin afectar su dignidad, renunciar a sus derechos o negociarlos. Tampoco el Estado puede disponer de los derechos de los ciudadanos. Se entiende que en situaciones extremas algunos derechos pueden ser limitados o suspendidos, pero nunca alienados (eliminados, extinguidos).

Los derechos humanos son *acumulativos, imprescriptibles o irreversibles*; Como la humanidad es cambiante, las necesidades también, por ello a través del tiempo vamos conquistando nuevos derechos, que una vez alcanzados forman parte del patrimonio de la dignidad humana.

Los derechos humanos son *inviolables*; Nadie puede atentar, lesionar o destruir los derechos humanos. Esto quiere decir que las personas y los gobiernos deben regirse por el respeto a los derechos humanos; las leyes dictadas no pueden ser contrarias a éstos y las políticas económicas y sociales que se implementan tampoco.

Los derechos humanos son *obligatorios*; Los derechos humanos imponen una obligación concreta a las personas y al Estado de respetarlos aunque no haya una ley que así lo diga. Queda claro entonces que es obligatorio respetar todos los derechos humanos que existan en nuestras leyes y también aquellos que no lo están aún.

Los derechos humanos *trascienden las fronteras nacionales*; Esta característica se refiere a que la comunidad internacional puede y debe intervenir cuando considere que un Estado está violando los derechos humanos de su población. En este sentido, ningún Estado puede argumentar violación de su soberanía cuando la comunidad internacional interviene para requerir que una violación a los derechos humanos sea corregida.

Los derechos humanos son *indivisibles, interdependientes, complementarios y no jerarquizables*; Los derechos humanos están relacionados entre sí, es decir, no podemos hacer ninguna separación ni pensar que unos son más importantes que otros. La negación de algún derecho en particular significa poner en peligro el conjunto de la dignidad de la persona, por lo que el disfrute de algún derecho no puede hacerse a costa de los demás.

Todas estas características nos orientan en poder esclarecer más el tema de los derechos y con ello podemos ir concretando cada vez más a que nos referimos y como lo podemos entender.

Por otro lado, en la legislación internacional, los derechos civiles y políticos o también llamados los llamados *derechos fundamentales*, han sido objeto de mucha más atención tanto en su protección jurídica como en su interpretación judicial, ello ha llevado a que se graben en el colectivo social, en mayor medida que los derechos sociales.

Este proceso tiene una explicación, por ejemplo se supone erróneamente que los derechos individuales, tales como, un juicio justo, el derecho a la igualdad, a la vida, al voto, etc., son derechos que pueden tener medidas de reparación, y escrutinio nacional e internacional. Por otro lado, a menudo se cree, que los derechos sociales son de segunda clase, de difícil aplicación y no sometidos a tribunales, ni a medidas de reparación, y que solo se pueden ir cumpliendo progresivamente con el tiempo.

Sin embargo, esta forma de ver las cosas deja de lado la visión integral que la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos sustenta (5) y según la cual la indivisibilidad e interdependencia de los derechos individuales y sociales son principios fundamentales de la legislación internacional de los derechos humanos.

Este tema se ha reafirmado muchas veces y la más reciente se llevó a cabo en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993, en donde se estableció que las personas pueden disfrutar de derechos individuales, libertades y de justicia social simultáneamente. Por tanto además de ser *indivisibles*, porque no pueden fraccionarse ni reducirse son por supuesto *interdependientes*, ya que la realización de cada derecho es indispensable para el pleno goce de los demás derechos.

(5) La Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante Resolución 217 A (III) el 10 de diciembre de 1948, establece en su preámbulo que: Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y ***se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad***; por tanto México al formar parte del concierto internacional, y firmar la Declaración Universal, se obliga aunque moralmente a llevar a cabo este considerando

Establecer un concepto de derechos humanos nos enfrenta a una gran variedad de autores de todas las tendencias ideológicas y nos impide conjuntar en un solo concepto todos los puntos de vista, por un lado existen autores que privilegian la naturaleza humana frente a la positivación de los derechos y otros que privilegian la normatividad de los derechos por encima de los derechos mismos.

En ese sentido, se hace necesario afirmar que: *“los derechos humanos están sustentados en un conjunto de valores que implican una idea de ser humano y de sociedad. Estos valores son universalmente reconocidos y permiten imaginar y construir una sociedad”* (Soler, 1998, citado en Antología, pag. 204, Papadimitriou, Greta.).

Por tanto y con el objeto de centrarnos en el análisis de los derechos humanos relacionados con los derechos sociales, el concepto que utilizaremos es el siguiente:

Los derechos humanos son todos aquellos valores de carácter individual y social que en igualdad de circunstancias y basados en la dignidad humana, son necesarios para el desarrollo armónico de los seres humanos en sociedad y que son necesarios proteger, defender e impulsar frente a toda acción del estado.

Este concepto ubica el ámbito social con la misma importancia a la esfera individual, estableciendo a los derechos sociales como parte indisoluble de los derechos fundamentales, y superar la discusión de la teoría liberal que privilegia al individuo sobre la sociedad, en este sentido, la relación entre los derechos liberales y los derechos sociales son los derechos humanos, ya que conforman una categoría unitaria de la dignidad humana y la autonomía moral de los seres humanos.

Por tanto y para concluir *"los derechos sociales son derechos humanos, ya que tienen su origen en la dignidad humana, que es inherente a todas las personas en su aspecto individual como social"*.

En este momento es importante establecer que existen varios autores que definen a los derechos sociales, en una forma histórica y como parte de un grupo débil socialmente, para ellos los derechos sociales son:

Autor	Postura
Dr. Lucio Mendieta y Nuñez, 1963.	"El conjunto de normas o disposiciones autónomas que establecen y desarrollan diferentes principios y procedimientos protectores a favor de personas, grupos, y sectores de la sociedad, integrados con individuos económicamente débiles, para lograr su convivencia con las otras clases sociales dentro de un orden justo".
Mario de la Cueva, 1965.	"Los derechos de los hombres a conducir una existencia digna, los derechos sociales a diferencia de los individuales imponen al Estado un hacer, una acción positiva que es doble: por una parte, cuidar de que el trabajo cualesquiera que sea el lugar y la forma en que se preste sea tratado de conformidad con su dignidad y con los principios de la declaración, y por otra, organizar las instituciones convenientes de seguridad social"
Dr. Trueba Urbina, 1965.	"El conjunto de principios, instituciones y normas que protege, tutela y reivindica a los que viven de su trabajo y a los económicamente débiles".

En un breve análisis de estos conceptos, podemos observar la idea generalizada que los derechos sociales son derechos que tienen que ver con los trabajadores y con los grupos más desprotegidos y no como nosotros lo tomaremos para esta investigación en donde los derechos sociales forman parte de los derechos fundamentales porque son indivisibles e interdependientes y por tanto, no se puede hacer una distinción entre ambos derechos.

En este sentido es necesaria esta acotación, porque a lo largo del trabajo los conceptos de los derechos sociales que más se apegan a la tesis del presente ensayo y que nosotros utilizaremos son los siguientes:

Los derechos sociales son:

Autor	Postura
Prieto Sanchis, 2001.	"Derechos prestacionales en sentido estricto, aquellos cuyo contenido obligacional consiste en dar bienes o proporcionar servicios que... el sujeto titular podría obtener en el mercado si tuviera medios suficientes para ello...nos ocuparemos sólo de los derechos que generan obligaciones frente a los poderes públicos, y que, además lo hace desde la Constitución, sin perjuicio de que hayan podido ser o de que sean en el futuro desarrollados por la normativa ordinaria".
Dr. Cruz Parceró, 2001.	"Ciertos bienes o valores (justicia, igualdad, salud, educación, etc.) y más específicamente a una serie de prestaciones o demandas para obtener o garantizar dichos bienes o valores que consideramos un medio para obtener aquello que llamamos justicia social".

De igual manera, un aspecto a destacar de estos autores es que los derechos sociales son derechos humanos que permiten a una persona y o su familia, como parte integrante de la sociedad, el tener un nivel de vida adecuado, y cuando nos referimos a un nivel de vida adecuado, nos remitimos principalmente al respeto a la diversidad cultural, geográfica y del medio ambiente, como condiciones fundamentales para la satisfacción de nuestras necesidades básicas como un *"bien común y un bien público"*, y permiten la plena realización del ser humano conforme a su dignidad inherente, entonces se confirma la hipótesis de que tienen la misma dimensión de derechos humanos.

Por otro lado, durante mucho tiempo se ha venido discutiendo acerca del valor fundamental de los derechos sociales, sobre todo cuando se habla de la *progresividad* de los derechos sociales y que, de acuerdo a las condiciones de cada, Estado pueden ser protegidos, en este sentido, existen tres objeciones a esta tesis de acuerdo a Alfonso Ruiz:

a) *"En primer lugar ningún derecho puede ser garantizado de manera absoluta frente a eventuales violaciones tanto del Estado como de particulares,"* por tanto lo que se pretende es que tanto derechos sociales como individuales se protejan de particulares pero fundamentalmente del Estado.

b) En segundo lugar, *"la insuficiencia de los recursos materiales no es exclusiva de los derechos sociales, sino que muy pocos derechos son baratos para su protección"*, en este sentido, seria necesario establecer un debate serio y responsable en torno al costo de los derechos individuales y sociales.

c) Por último, *"es falsa la premisa de los juristas que dicen que el deber hacer y el poder hacer tienen que ver con un ser determinado (derechos individuales) y no con un ser indeterminado (derechos sociales) porque todo depende de la moral de las Instituciones del Estado para proteger ambas posturas"*. (Alfonso Ruiz, 1994), en este sentido un Estado puede y en general pone muchas trabas a

la protección de los derechos sociales y en ese mismo sentido, puede no proteger ningún derecho, sin importar si son derechos sociales o individuales.

Otro argumento a favor de los derechos sociales como fundamentales es la Universalidad ya que ella no solo responde a derechos que imponen deberes negativos, es decir prohibiciones o abstenciones al Estado, como por ejemplo el derecho a la vida o al voto, sino también en derechos que imponen deberes positivos o de prestación como la protección a la salud y el derecho a la educación, en donde es fundamental la forma en que el Estado proteja, formal y jurídicamente el ingreso a la educación en todos los niveles y no solo en la educación básica, por ejemplo.

Ahora bien, es importante destacar que *“la gran mayoría de las conquistas sociales que se introdujeron en la Constitución de 1917 no consistieron en la imposición de deberes a los órganos del Estado (salvo la prestación de la educación gratuita en el artículo tercero), sino fundamentalmente en la imposición de limitaciones a las conductas de los particulares, tanto en materia agraria como laboral”* (Cruz Parceró, 2001).

En este tenor, es necesario establecer un par de cuestiones: *¿El Estado mexicano ha dejado de proteger los derechos sociales a lo largo de los últimos años?*, si esto es cierto, *¿Por qué se ha dado?*. Todo ello, a pesar de que jurídicamente durante los años 70s, se reformó la Constitución para ser más amplio la protección de los derechos sociales, fundamentalmente el artículo cuarto constitucional (6) en relación a la protección de la familia y a los menores, sin embargo, *“las reformas constitucionales y las políticas públicas implementadas...no sirvieron para palear los problemas del país tal y como lo muestran los indicadores del bienestar social... el nivel de vida de los mexicanos ha venido descendiendo paulatinamente”* (Cruz Parceró, 2001).

Por tanto y para poder concluir, en primer lugar es necesario hacer un seguimiento histórico de cómo ha venido sucediendo la protección o falta de esta

en materia de derechos sociales, y en segundo lugar, tomando en cuenta que los derechos humanos son indivisibles e interdependientes se debe prestar la misma atención y consideración urgente a los derechos sociales como a los derechos individuales, bajo la premisa de la integralidad establecida y reconocida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y reafirmada en la Declaración de Viena en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993, así que, cuando exista una exigencia por parte de la sociedad en donde en determinado derecho social no se ha cumplido, se está en consecuencia ante una flagrante violación a los derechos humanos.

(6)*El artículo 4º constitucional se ha venido convirtiendo, a través de las distintas reformas que se le han hecho, en un verdadero mosaico de disposiciones constitucionales que no tienen mucha o ninguna relación entre ellas.... Cabe mencionar que el contenido original aprobado por el Constituyente de 1917 para el artículo 4º fue transferido, por una reforma publicada el 3 de diciembre de 1974, a los dos primeros párrafos de del vigente artículo 5º de la carta magna." (Miguel Carbonell, 2001)

El texto actual del mencionado artículo es el siguiente de acuerdo a la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001.

"El varón y la mujer son iguales ante la Ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Toda persona tiene el derecho de decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI DEL Artículo 73 de esta Constitución.

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

Los ascendientes, tutores o custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez "

CAPITULO II

DERECHOS SOCIALES EN MÉXICO

En México la principal fuente de legitimidad del régimen fue su origen Revolucionario, tanto en el ámbito político como en el económico y principalmente en lo social. Para Lorenzo Meyer son tres los valores básico que planteó la Revolución Mexicana, *“en primer lugar, el reclamo de la democracia política frente al autoritarismo imperante, en segundo lugar, la exigencia de la justicia social como la vía para hacer imperar la justicia distributiva en una sociedad históricamente caracterizada por una notable desigualdad en la distribución de la riqueza y por último la defensa de la independencia frente a las fuerzas de integración de los E.U. que dio pie al Nacionalismo mexicano del siglo XX.”* (Meyer 1992).

En el presente ensayo el segundo punto es fundamental y por lo tanto es necesario explicitarlo.

El segundo gran valor que planteó la Revolución Mexicana fue: *“los derechos sociales”*, estos estuvieron presente de una u otra forma durante todas las demandas de Villa y Zapata, sin embargo el momento histórico que incorporó una mayor dosis de derechos sociales en el régimen, fue durante el Cardenismo.

El gobierno de Cárdenas colocó en el centro de la discusión, el rumbo que debía tomar el país en relación a las demandas sociales, *“en efecto, en primer término el Cardenismo se plantea desde sus inicios como un movimiento reivindicador del programa global de la Revolución y sobre todo, del plan de reformas sociales que habían venido omitiendo, de mayor o menor medida los gobiernos que emanaron del proceso revolucionario”* (Córdoba, 1989).

El Estado Posrevolucionario no actuó de forma unívoca sino que fue modificando su actuar a lo largo de los últimos sesenta años, esto es desde la época Cardenista hasta principios del siglo XXI, por lo tanto dividiremos este proceso en dos grandes periodos.

PRIMER PERIODO

El primero abarca de la década de los cuarentas hasta la década de los ochentas y el segunda abarca de la crisis del Estado de bienestar en 1982 hasta los primeros años del presente siglo, en cada una de estas hay diferencias muy marcadas pero también hay similitudes muy importantes, una de estas es el papel tan importante que tiene el Estado en el desarrollo social y para ello es necesario preguntarse ¿Cómo se ha comportado el Estado Mexicano en el desarrollo social en los dos periodos a analizar?.

Para dar respuesta a esta interrogante, es importante rescatar el rasgo tutelar del Estado, en la década de los cuarenta se desarrolló un sistema de protección social en la que los derechos sociales de la población deberían ser garantizados por el Estado y este a su vez se convirtió en el principal responsable del bienestar de la población y de los derechos incorporados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917.

Nuestra Constitución no solamente catalogó derechos y garantías de tipo individual, sino que fue pionera en establecer derechos sociales que impulsaron determinados grupos, que por su especial situación de desventaja requerían de protección especial de la Ley, por ejemplo, el caso de los trabajadores y de los campesinos, además estos grupos formaron parte importante de la Revolución Mexicana de 1910 y era necesario incorporarlos en un marco jurídico que amparara sus derechos, este hecho aunque pareciera muy relevante para estos

grupos es necesario establecer que se trato más de legitimar al grupo triunfante que realmente enarbolar las banderas sociales, y por otro lado le quitaban exigencias a determinados grupos y los orillaron a canalizarlas por medio de instituciones creadas ex profeso como veremos más adelante.

La legislación constitucional mexicana prevé diversas garantías sociales, dentro de las que encontramos, el derecho al trabajo incluyendo las bases mínimas de la organización de la seguridad social, cobertura en accidentes, enfermedades profesionales y no profesionales, así como la maternidad, la vejez, la jubilación y la muerte (artículo 123o.) derecho ala protección a la salud (artículo 4o.), derecho a la vivienda (artículo 4o), derecho a la educación incluyendo la educación secundaria como obligatoria a partir de año de 1992 (artículo 3o), etc. que son de los más representativos derechos sociales

Pero cual es el modelo de protección social que se implementó en México, para Sara Gordon *"es un modelo que impulsaba la integración social y promovía la vigencia de los derechos sociales, además de impulsar la subordinación del individuo al Estado y colocaba al los trabajadores bajo la autoridad del Estado, alentando la protección social estableciendo categorías de beneficios y aplicando una modalidad corporativa que otorga a los servidores públicos un lugar privilegiado"*. (Sara Gordon 1999)

Este sistema, a la vez de fortalecer el mercado interno, implementó programas de seguridad social que tenían el objetivo de asegurar a las personas que se encontraran empleados, de esta manera se dejaba excluido a grupos de trabajadores rurales y mujeres, como también a los no vinculados en la economía formal, esta propició que este modelo se sustentaran en una relación corporativa y estratificada entre el Estado y los trabajadores.

La creación del Instituto Mexicano del Seguro Social en 1943, tuvo el objetivo de otorgar atención médica y otras prestaciones a todos los trabajadores

asalariados, confirmando con esto la desvinculación entre el Estado y los no asalariados, que al final de cuenta es la población más vulnerable.

Otro rasgo distintivo de la seguridad social de esos años, fue la de los beneficios de la seguridad social, como indemnizaciones relacionadas con las enfermedades o accidentes de trabajo, jubilaciones, aunque es necesario acotarlo nuevamente a los trabajadores de la economía formal y del Estado, y por otro lado, *el acceso a elementos adicionales de bienestar, acceso a vivienda, créditos con intereses bajos se reservaron a grupos directamente vinculados con el poder y agrupados en organizaciones sindicales*, no era extensivo a toda la población, por tanto se repetía el fenómeno de la estratificación y del clientelismo, basado en un intercambio y apoyo político de diversos grupos y no como una política de protección de los derechos sociales general.

En este sentido es importante destacar que el gasto social que se canalizó fue concebido como parte del proyecto de desarrollo, que respondía al propósito de promover el mercado interno y a legitimar al Estado, por tanto los subsidios a los alimentos, al transporte y a bienes colectivos ayudaban a mantener bajos los salarios y con ello las industrias gozaban de un proteccionismo para mantener un mercado interno relativamente fuerte y que no fuera exigido en el exterior, que fue otro rasgo distintivo del proyecto social en este periodo.

En el mismo periodo se estableció otro rasgo distintivo de la seguridad social al ampliarse la protección a sectores organizados, como los trabajadores del Estado, ferrocarrileros, petroleros, azucareros, etcétera, la creación del Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores de Estado (ISSSTE) en 1960, la creación de entidades regulativas como INMECAFE, TABAMEX y en el abasto de productos básicos (maíz, frijol, trigo, etc.) LICONSA, DICONSA y CONASUPO. En relación a la vivienda se creó el Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), el Fondo para la Vivienda de los Trabajadores al Servicio del Estado (FOVISSSTE) y el Instituto Nacional para el Desarrollo de

la Comunidad y la Vivienda Popular (INDECO) dirigido a sectores de población que no tenían acceso a la seguridad social tratando de paliar la falta de atención de sectores no organizados.

En relación a la salud, "entre 1970 y 1981 la población derechohabiente aumentó de 24.4% a 49% y se puso en marcha en 1973 el programa IMSS-SOLIDARIDAD para atender a la población no afiliada, sobre todo de las zonas rurales" (Sara Gordon 1999).

A pesar de la idea de ampliar la protección de los derechos sociales el porcentaje del PIB que se canalizó se consideró limitado, *"entre 1971 y 1976 este porcentaje fue de 7.8 y de 1977 a 1982 descendió a 7.6 por ciento, para disminuir hasta cerca del 6 por ciento a raíz de la crisis financiera de 1982 e incrementarse apenas en 1991, cuando representó 7.46 por ciento; otro ejemplo de esto es que el porcentaje del gasto sectorial de desarrollo social fue de 22.1 por ciento, pero la crisis del 82 provocó que cayera a 13.8 por ciento"* (Sara Gordon 1999).

Todo esto forma parte de un proceso de legitimación del Estado Mexicano ya que se estableció como el impulsor para elevar el nivel de vida de la población y cumplir aunque sea *"parcialmente"* con los derechos sociales. En efecto, *"algunos sectores de las clases medias y populares vieron, durante muchos años, como sus ingresos y su nivel de vida se elevaba con cierta constancia, El relativo éxito del modelo de sustitución de importaciones para el mercado interno permitió al Estado contar con una serie de recursos que significó un aumento neto de los niveles de vida de la población, en especial de los grupos corporativos, aunque continuó la desigual distribución de la riqueza"* (Molinar Horcasitas, 1991).

Por último y siguiendo con la línea de los rasgos distintivos del periodo, otro rasgo fue la aplicación de programas focalizados para atender las necesidades de los más pobres, por ejemplo se creó la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR), para canalizar recursos a la población con niveles de vida más bajos, otro programa fue el

Programa de Inversiones para el Desarrollo Rural (PIDER) para dar empleo y dotar de infraestructura a zonas rurales aisladas, proyectos productivos agropecuarios, forestales y de pequeñas industrias

Todo lo anterior trajo consigo algunas consecuencias:

La primera fue, la centralización de las relaciones políticas y sociales en corporaciones ligadas al partido oficial (PRI) con el Estado, esto generó que las organizaciones se manejaran corporativamente, así la representación social se mezclaba con la representación política y las demandas se formulaban y atendían por intermediación de las grandes centrales de trabajadores sindicalizados, entre ellas la Confederación de Trabajadores de México, (CTM), la Confederación Nacional Campesina (CNC), la Federación de Sindicatos de trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), entre otros, que basaban su fuerza por su gran interlocución con el Estado, su capacidad de control con las bases y por medio de las instancias de intermediación del partido oficial (PRI).

En segundo lugar, se estableció que las mejores de carácter social se segmentaran y estratificaran al grado de que numerosas ocasiones sirvió para reforzar distancias sociales más que para compensar desventajas, por ejemplo la aplicación de la política de protección social en bienes tan básicos como la salud se enmarca en un proceso más de las ciudades grandes y medias que en poblaciones rurales, lo mismo sucedió en el campo de la educación, que aunque más de la mitad del presupuesto público se dedicó desarrollo social, este beneficio se vuelca hacia las ciudades más que hacia el campo.

SEGUNDO PERIODO

Al inicio de la década de los ochentas en nuestro país se vivió un cambio en relación a la aplicación de la política social, el nuevo modelo económico implementado por el Régimen llevaba consigo una gran cantidad de cambios,

entre otros, el control total de los precios de los productos y los salarios para evitar la inflación, además de ejercer por medio del mercado un control de la economía y la apertura comercial como punta de lanza para el modelo neoliberal.

En este sentido, el carácter tutelar del Estado cambió y se modificaron los compromisos adquiridos después de la Revolución como parte fundamental de legitimar al Régimen, estableciendo una menor participación del Estado en su compromiso de crecimiento económico por la vía de la protección de la Economía nacional y el papel distributivo de la riqueza.

En 1982 México tuvo una severa crisis económica que provocó la reducción en el gasto social al 6% como proporción del PIB, aunado a que la demanda de los servicios aumentaba, la población tenía un crecimiento sostenido y el deterioro de las condiciones de vida era muy profundo.

A pesar de que se decía que el desarrollo social era fundamental las políticas estatales durante este periodo no respondieron a acciones más profundas y por lo tanto *“no se diseñó una política de largo plazo que buscara soluciones de fondo, sino que se le fijaron objetivos múltiples que la convirtieron en una cadena de respuestas de coyuntura, con énfasis y diseño de organización distintos según el criterio prevaleciente en cada gobierno y que han resultado ineficaces para solucionar los problemas y carencias sociales”*. (Carmen Pardo 1996).

Una de las modificaciones substanciales en el periodo es la utilización de conceptos como el de la eficiencia y la productividad, entendidas estas como el obtener mayores beneficios con menos recursos, esta definición sintética puede parecer hasta cierto punto aceptable, el problema empieza cuando se hace a costa de cualquier circunstancia y en el ámbito económico aplicado en los años ochentas y noventas se perfiló como el desplazamiento de recursos de áreas prioritarias como la protección y desarrollo de los derechos sociales a zonas de no prioridad como el servicio de pago de deuda. Ejemplo de ello es la

desincorporación de entidades paraestatales consideradas no estratégicas y que los gobiernos anteriores habían hecho gran difusión, como el Instituto de Café y las Empresas al Consumo básico como Conasupo, que aunque no cumplían con todas las expectativas en materia social como se vio claramente en el anterior apartado, si tenían la posibilidad de ayudar en alguna medida a las clases más desprotegidas.

Otro caso paradigmático de la política en materia social del Estado fue la de la privatización de las pensiones, y eliminar con ello la participación de los sindicatos y de los trabajadores protegidos en el ISSSTE y en el IMSS. En el mismo sentido, se estableció un sistema de puntos para la obtención de vivienda con la finalidad de evitar clientelismos y privilegios de grupos afines al Estado, pero esto también redujo la participación de otras organizaciones sociales que quedaron relegados, como los grupos de colonos que exigían vivienda popular, frente a los particulares que tenían los puntos suficientes para acceder a la vivienda.

Con el propósito de quitarse la responsabilidad social, el Estado implementó un proceso de descentralización con el fin de incorporar a los otros órganos de Gobierno en dichas decisiones, por tanto el Gobierno Federal, Estatal y Municipal tomaron parte de este proceso en lo referente a la recaudación de impuestos, pero la obligación de transferirlos quedó en manos del Gobierno Federal, que los regresó por medio de subsidios pero en una cantidad muy inferior a lo necesario y bajo la premisa de que se asigne a determinados rubros y no a lo que el Estado o Municipio decidan.

En el ámbito de la Educación (7), la descentralización abarcó la transferencia de los bienes inmuebles, mobiliario, plazas de maestros y la impartición de clases a los 31 Estados de la República, con excepción del Distrito Federal, dentro del programa denominado Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa en 1992, aunque nuevamente se discute que se transfieren responsabilidades a los Estados pero no suficientes recursos para elevar el nivel educativo, prueba de ello

es el resultado de la encuesta a los países que forman parte de la OCDE y el lugar que México ocupó fue el último.

(7)Derecho a la educación.

Porcentaje del Producto Nacional Bruto a la Educación (1995-1997): 4.9 %

En 1998 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe sobre la situación de los derechos humanos en México. En dicho informe, la Comisión recomienda a México: "Que continúe las inversiones y mejore las condiciones, en general, en el sector de la educación, con el propósito de aumentar los índices de atención escolar y desarrollar programas específicos de alfabetización para los adultos e indígenas".

Por su parte, el INEGI, en los indicadores sobre características educativas de la población de 1990 y 2000, (Cfr XII Censo de población y vivienda, 2000) establece un porcentaje de 8.2% de la población entre 6 y 14 años que no asiste a la escuela.

De acuerdo con un informe de la CEPAL de 1996, "Aumentó el número de niños que empiezan a trabajar más temprano. En 1970, el 6.2% de los niños entre 10 y 14 años de edad estaban empleados, este número casi fue duplicado a 12.3% en 1990 y se mantuvo elevado en 1995 con un 11.1%.

Por su parte, las organizaciones civiles mexicanas en su informe alternativo ante el Comité de los DESC, en 1999, señalaron: "En 1995 se reportaron 13,373 menores viviendo y trabajando en la calles de la Ciudad de México (DF). Datos proporcionados por UNICEF señalan que en la actualidad ascienden a casi 20,000 el número de menores en estas condiciones"

En relación al desigual acceso a la educación, de personas mayores de 15 años, "en 1993, el 13.6% de la población adulta femenina era analfabeta, en comparación con el 8.9% de la población adulta masculina, y el porcentaje de mujeres estudiantes era menor en un 6% que el de los varones" Cf. Informe, Consejo Económico y Social, 18 de noviembre de 1999, Pág. 3. Todos estos datos son el fiel reflejo de la total desatención del Estado en relación a la aplicación de políticas encaminadas a mejorar la calidad de la educación

En este sentido y de acuerdo con Areli Sandoval, coordinadora del control ciudadano México, del Programa Diplomacia ciudadana de DECA Equipo Pueblo, *"La educación es el eje de la política de desarrollo humano y social del gobierno según el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. Sin embargo, se prevé gastar en educación superior para todo el sexenio 50 mil millones de pesos, mientras que para el rescate bancario se le aplican 70 mil millones de pesos en tan sólo dos años. Asimismo, la propuesta del presupuesto de Ecuación Federal 2002 prevé un recorte de hasta 2 mil 500 millones de pesos en educación superior que representa 3.3% y en materia de ciencia y tecnología el recorte representa casi 18%. Otro ejemplo, al Instituto Politécnico Nacional se le reduce 7.49% de su presupuesto respecto al 2001, y ala Universidad Autónoma Metropolitana 8.28%. Con esta reducción no se alcanzará la meta de invertir en educación el 8% del PIB"*.

Por otro lado, con la finalidad de contener y mitigar en parte los efectos de la discriminación en las políticas sociales del Estado se hecho a andar el Programa Nacional de Solidaridad en 1988, dicho programa estaba dirigido a grupos determinados como campesinos, indígenas y colonos. Aunque el programa pretendía atender una gran diversidad de problemas sociales como la salud, la alimentación, la vivienda, los servicios urbanos y el acceso al empleo, se destino una cantidad muy limitada de recursos frente a la gran problemática de la pobreza y los problemas a enfrentar, solo vasta conocer algunas cifras: *"los recursos destinados al programa se incrementaron de 1, 640 millones de pesos esto es el .32% del PIB en 1989 a 9,233 millones esto es el .73% del PIB en 1994. Esta proporción resulta sumamente limitada si se considera que en 1988 el 59% de la población vivía en situación de pobreza"* (Sara Gordon, 1999).

En el mismo sentido, otra problemática del Programa de Solidaridad que generó fue que los que resultaron beneficiados fueron los grupos organizados y no la población con mayores carencias y quienes más lo requerían, que era al final de cuentas el propósito del proyecto, además que *Solidaridad se implementó como un programa fundamentalmente electoral y la mayoría de las poblaciones que en 1988 le dieron la espalda al Régimen a punta de votos, fueron a las que no recibieron apoyos y si los recibían, eran condicionados a votar por el partido oficial, muestra de ello son las elecciones intermedias de 1991, en donde el número de votantes se incrementó considerablemente a su favor, dejando muy atrás las cifras obtenidas por el partido tres años atrás.*

Al inició de la siguiente administración, los programas como Solidaridad, las Cajas Solidarias y las Fonaes, dejaron de ser importantes, pero se mantuvo la política de la descentralización y la asignación de recursos por medio de la asignación del ramo 26 para la generación de empleos, el mejoramiento de actividades productivas, etc. Todos estos programas se dirigían hacia el Gobierno del Estado y otros hacia los Municipios, en base a un programa de indicadores pobreza, elaborados a partir de las condiciones de rezago social y la magnitud de la pobreza. Uno de los problemas que tiene la aplicación del Programa del Ramo 26 es la falta de mecanismos reales de rendición de cuentas, provocando con ello el fortalecimiento de poderes locales y no el abatimiento de la pobreza.

Por otro lado, y siguiendo la política de programas de corte asistencial, se implemento el Progreso, con la intención de abatir la pobreza, además de disminuir las tasas de mortalidad, mejorar la nutrición y la salud por medio de un paquete básico de salud y educación, principalmente de la niñez; Así la familia que recibía la atención médica necesitaba presentar las calificaciones de los niños en edad escolar y con ello reactivar la tarjeta para recibir el subsidio, fundamentalmente en áreas urbanas ya que en áreas rurales se entregaba una canasta básica, nuevamente se concentra todo lo poco que hace el Estado en

relación a proteger los derechos sociales de la población en programas focalizados y con poco impacto a la mayoría de la población.

En este sentido quizá valga la pena apuntar ciertos datos, en los cuales se puede ejemplificar como el fenómeno de la globalización, que ha permitido una gran diversificación en el intercambio de mercancías, ha incidido muy poco en la ampliación de los derechos y el mejoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de los mexicanos.

Entre 1981 y 1987 la población total del país aumentó de 71.4 a 81.2 millones de personas, pero los pobres en ese mismo periodo pasaron de 32.1 a 41.3 millones, es decir 9 de cada 10 mexicanos que nacieron lo hicieron en condición de pobreza.

La pirámide social estaba formada en 1994 por 40% de pobres extremos (33% de indigentes y 7% de muy pobres), 29% de moderados y 31% de no pobres. Para 1996 la pirámide se había engrosado en la base: 55% de pobres extremos (43% de indigentes y 12% de muy pobres), 24% de pobres moderados y 21% de no pobres. De una estructura de 40%, 29%, 31% se había pasado, en solo 2 años a una de 55%, 24%, 21% (véase cuadro 1)

Mientras que en 1994 la población vivía en los hogares en los que el ingreso per cápita es menor que la línea de pobreza sumaba 61.7 millones de personas, para 1996 esa cantidad situaba ya en 72.2 millones: 10 millones más de pobres en solo dos años, la pobreza creció, en ese periodo, 3.3 veces más rápido que la población. (véase cuadro 2)

Cuadro No. 1*

	1994	1996	Incremento
Población (millones)	89.368	92.587	3.219
Pobres (millones)	61.664	72.219	10.555
% de población	69.0	78.0	11.8
Pobres moderados(millones)	25.470	21.295	-4.175
% de la población	28.5	23.0	-4.147
Pobres extremos (millones)	36.2	50.9	14.7
% de la población	40.5	55.0	16.5
Indigentes (millones)	29.760	40.090	10.330
% de la población	33.3	43.3	11.6
No pobres (millones)	27.7	20.4	-7.3
% de la población	31.0	22.0	-8.2

*Fuente: Bolvitnik, Julio, La jornada, 16 de octubre de 1995.

Cuadro No. 2*

Evolución de la pobreza en México según la CEPAL, 1989-1998		
Año	% de hogares pobres	% de personas pobres
1989	39	48
1994	36	45
1996	43	52
1998	38	47

*Fuente: Bolvitnik, Julio, La jornada, 25 de agosto de 2000.

En este sentido, se pueden aportar diversos datos de la situación general del país (8), inferidos del análisis de los cuadros anteriores y que, *nos centra en una posición en donde se hace necesario proteger y defender los derechos sociales en nuestro país en forma más profunda y clara.*

(8) ANEXO I

Como parte fundamental del análisis llevado a cabo de nuestro país, es necesario establecer un referente con otras regiones de América Latina, ya que con ello se puede establecer con más claridad que a pesar de tener programas que busquen abatir la pobreza y las condiciones de desigualdad social, si nos referimos a América Latina aún así quedamos muy mal parados

Por ejemplo al examinar el anexo I ubicamos a nuestro país con una población de más de noventa millones de habitantes y con un crecimiento anual de 1.7 %, mayor que el MERCOSUR que crece a una tasa anual de 1.52%, y si este crecimiento lo comparamos con el Índice de desarrollo humano, observamos como nuestro país se mueve ligeramente por debajo de nuestro vecinos del MERCOSUR, otro elemento a destacar es que a pesar de ubicarse el porcentaje de desnutrición muy por debajo de la mayoría de los países de la región, solamente el 5%, frente al 18.1% de los países de América Central, no debemos de cantar victoria porque en números reales, la cantidad de población en situación de desnutrición es mucho mayor ya que se debe tomar que nuestra población es de casi 100 millones y la población de América Central es de apenas 35 millones.

Otro elemento a destacar es el porcentaje destinado a la Educación, en este sentido el porcentaje de 4.9 % del PIB es relativamente más bajo que el 4.12% del PIB que la región del MERCOSUR le otorga a la Educación.

Por último, el cruce de variables de los hogares en situación de pobreza (38% en México, frente al 23.5% de MERCOSUR) nos deja muy mal parados, sobre todo si lo cruzamos con el 13% de los hogares en situación de indigencia frente al 8% de la zona del MERCOSUR, esto nos da una idea de cómo estamos si confrontamos a nuestro país con países de la región, ya que si nos referimos a países de Europa y del Norte de América, seguramente quedaremos muy por debajo de ellos y si nos referimos y comparamos con países de África, seguramente nos sentiríamos muy orgullosos de nuestros programas sociales, con ello quiero decir que no debemos de confiar en las encuestas si no sabemos de cuál es la fuente y si no las cruzamos con otros elementos de las mismas encuestas. (Todas las cifras son sacadas de los cuadros proporcionados del Informe de Desarrollo Humanos del Programa sobre Desarrollo Humano del PNUD del año 2001, y estas cifras pueden haber cambiado a raíz de los acontecimientos de los últimos años en Argentina y Brasil)

OBLIGACIONES DEL ESTADO MEXICANO EN MATERIA DE DERECHOS SOCIALES

Es importante destacar que existe una obligación estatal en relación a los derechos sociales, al formar parte del concierto internacional de naciones unidas el Gobierno de México tiene obligaciones tanto éticas como jurídicas. Por ejemplo, en la Carta de Naciones Unidas del 26 de junio de 1945, *“impone a los Estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de todos los derechos humanos y en ella los Estados se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida.”*, esta obligación moral y ética que impone esta Carta y que fue el origen del considerando que viene en la Declaración Universal de Derechos Humanos que en la cita (6) se analizó previamente, viene junto a una obligación jurídica internacional de derechos humanos con el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales que entró en vigor en nuestro país el 23 de marzo de 1981, en el cual el Estado se compromete a adoptar diversas medidas para cumplir, por tanto en Estado Mexicano esta obligado tanto moral como jurídicamente.

Para el Estado Mexicano existen tres tipos de obligaciones generales:

- 1) En primer lugar el RESPETAR, exige que el Estado se abstenga de adoptar medidas que obstaculicen o impidan el goce de los derechos humanos.
- 2) En segundo lugar el PROTEGER, demanda del Estado medidas para velar por el respeto de los derechos humanos por parte de terceros (por ejemplo empresas e individuos particulares), además de proveer mecanismos para la defensa de los derechos (esto es obligar a justiciabilizar los derechos).

- 3) Y por último, el REALIZAR, en donde se entrañan obligaciones de promover y hacer efectivos cada derecho humano.

En este sentido, se destacan las Recomendaciones sobre derechos humanos al gobierno mexicano de 1997 al 2000, editado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, a raíz de los trabajos llevados a cabo por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, al examinar el *tercer informe periódico de México* (9) en sus sesiones 44^a a 46^a, los días 25 y 26 de noviembre de 1999 y aprobó en su 54^a sesión celebrada el 2 de diciembre de 1999, las observaciones finales que figuran a continuación.

En primer lugar el informe señala una serie de factores y dificultades que obstaculizan la aplicación del Pacto, así como los motivos de preocupación, de los cuales haremos una síntesis.

a) En primer lugar, se enfatiza la problemática de la crisis económica de 1995 y que afecta principalmente a los grupos más vulnerables.

b) Otro aspecto son los desastres naturales y con ello las limitaciones que se imponen en la garantía de estos derechos.

c) El tercer punto con más preocupación la gran cantidad de personas que viven en pobreza y pobreza extrema, y a menos que se traten las causas estructurales como es debido, no se logrará una distribución más equitativa de la riqueza, en este sentido al comité le interesa las condiciones sociales de poblaciones indígenas de Chiapas, Guerrero, Veracruz y Oaxaca, sobre todo en lo relativo a los servicios de salud, educación, empleo, nutrición adecuada o vivienda adecuada.

(9) El informe presentado es una obligación del gobierno mexicano como Estado Miembro de la Organización de las Naciones Unidas al aceptar la Carta de las Naciones Unidas en donde se compromete a "asegurar, en cooperación con las Naciones Unidas, la promoción del respeto universal y la observancia de los derechos humanos y libertades fundamentales"

d) Otro punto a destacar es la privatización del régimen de seguridad social y que podría privar de ciertas prestaciones a quien no puede hacer aportaciones voluntarias, como desempleados, subempleados, obreros de escasos recursos, etc.

e) En relación a ciertas regiones del país, es preocupante la presencia de numerosas fuerzas militares y paramilitares en comunidades indígenas de Chiapas y otras regiones, que interfieren en la supervisión y aplicación de programas de desarrollo y en la distribución de asistencia económica y social.

f) por último, en relación al salario, la Comisión Nacional de Salario Mínimo, no ha ajustado el alza al salario y es preciso ganar cinco veces el salario mínimo para adquirir la canasta básica constitucional, además de violación del inciso ii) del párrafo a) del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en lo referente a *“las condiciones de existencias dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del presente pacto”*.

Todas y cada una de los factores y dificultades que obstaculizan la aplicación del Pacto y los motivos de preocupación de el Comité previamente establecidos, son temas que el gobierno de México no puede soslayar y es una presión internacional para que las cumpla, además de que las organizaciones defensoras de derechos humanos tanto como la públicas como la civiles deben de hacerlos del conocimiento público y a lo que se ha comprometido el Gobierno de México, sin duda el papel de las Instituciones Publicas que es el tema que nos ocupa tienen mucho que decir al respecto.

Por otro lado, el mismo Comité propone sugerencias y recomendaciones que el Gobierno de México debe cumplir para incidir en la mejor aplicación del Pacto.

- a) En primer lugar, *solicita que se fijen puntos específicos de referencia para vigilar los adelantos en la lucha contra la pobreza y se solicita que en su cuarto informe se hiciera una evolución de los progresos alcanzados en el goce de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.*
- b) En segundo lugar, *se exhorta al Gobierno de México a abordar las causas estructurales de la pobreza en nuestro país y ajustar sus programas sociales.*
- c) El Comité pide al Gobierno de México, *que al negociar con Instituciones financieras internacionales y aplicar programas de ajuste estructural y políticas macro económicas tome en cuenta sus consecuencias para el disfrute de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en particular de los grupos más vulnerables.*
- d) En cuarto lugar el Comité solicita *que se adopten medidas más eficaces para garantizar el cumplimiento del inciso ii) del apartado a) del artículo 7 del Pacto (10) en relación con la canasta básica establecida oficialmente.*
- e) En quinto lugar, el comité insta *a que se tomen medidas más eficaces para combatir la violencia domestica, además lo exhorta a realizar más actividades para facilitar viviendas adecuadas, a precios asequibles.*

(10)En relación a este punto el Pacto dice: . . .a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores

i)...

ii) Condiciones de existencias dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del presente Pacto ;

Por tanto podemos deducir que un salario digno tiene que cubrir condiciones de existencia dignas, entonces concluiremos que al aumentar el salario mínimo en un 4.5 % y colocar el salario medio en 43 65 pesos diarios ¿este alcanza para cubrir los elementos básicos indispensables para vivir dignamente? Y si no es así, ¿El estado tiene alguna responsabilidad jurídica?, ¿Una Comisión de Derechos Humanos puede hacer algo?, esto lo analizaremos más adelante

- f) En sexto lugar, se exhorta a tomar medidas eficaces para prestar a todos los niños atención básica de la salud y para luchar contra la malnutrición, haciendo especial hincapié en la niñez de los grupos indígenas.*
- g) Y por último, se recomienda que el Gobierno supervise y regule la función de las fuerzas militares y paramilitares, a fin de garantizar la aplicación de programas de desarrollo y asistencia social (11).*

Esté breve análisis nos permite establecer dos preguntas a desarrollar más adelante:

Como hemos visto en varios ejemplos analizados, el Estado Mexicano ha dejado de actuar en relación a la protección de los derechos sociales, a pesar de las obligaciones éticas y jurídicas que tiene, por tanto cabe la pena preguntar, ¿Qué hacen las Instituciones Publicas de Defensa de los Derechos Humanos, llamadas comúnmente Comisiones de Derechos Humanos, en la protección de los derechos y principalmente en relación a la defensa de los derechos sociales? Y por último ¿Cómo se puede impulsar desde estos Organismos una protección más efectiva de estos derechos?

(11) Para verificar todos y cada una de los puntos previamente analizados es necesario revisar el documento "Recomendaciones sobre Derechos Humanos al gobierno mexicano 1997-2000" del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., México agosto del 2000.

CAPITULO III

LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL Y LOS DERECHOS SOCIALES

En México, *la protección de los derechos humanos no puede entenderse sin la creación de organismos civiles por diversos miembros de la sociedad civil, para contrarrestar la represión y desaparición de opositores al régimen durante la década de los 60s y 70s.* De ahí que las organizaciones civiles son fundamentales dentro de un movimiento amplio de defensa de los derechos humanos debido a la naturaleza de los mismos y como una reivindicación de la sociedad frente al Estado. En el caso que nos ocupa, han tenido un papel muy importante en la protección de los derechos sociales en México.

En palabras de Miguel Sarre las organizaciones civiles son: *"la voz de la sociedad organizada...significan dentro de una sociedad muy poco organizada un intento o una estructuración que capta las demandas y necesidades sociales y las plantea a las autoridades...son un mecanismo de atención de demandas, cumplen funciones de articulación entre los macro niveles de decisión y los micro niveles de ejecución en las bases de la sociedad"* (Mascott Sánchez, 1995).

Estas instituciones son imprescindibles en la protección y defensa de los derechos humanos, además de ser actores principales en la defensa de los derechos sociales a lo largo de los últimos años, esto es así, por haber sido abandonadas políticas del bienestar social por parte del Estado, las organizaciones civiles tomaron el papel fundamental en la búsqueda de protección a los derechos sociales y en muchos casos el hilo conductor que la sociedad mexicana tiene para proteger y defender los derechos sociales, y forman hoy indiscutiblemente una parte necesaria en el tejido social emergente y combativo, por ejemplo, no podemos olvidar al movimiento urbano popular en la

lucha por la defensa del derecho a una vivienda digna y popular, dando muestra de la capacidad de reacción de grandes sectores sociales que se vieron afectados por los sismos de 1985 frente a la nula respuesta por parte del Estado.

Es posible distinguir varios tipos de organizaciones civiles de acuerdo a su campo de acción, por ejemplo, existen organismos de defensa de los derechos de las mujeres, de los derechos de la niñez, de los indígenas, etc., y por ello representan un amplio espectro de los distintos grupos de la sociedad, todas y cada una de las organizaciones de defensa civiles de los derechos humanos, tienen una causa común: la dignidad humana como valor fundamental para toda sociedad que busca el bienestar de su población.

En este sentido, es necesario analizar a otras instituciones defensoras de los derechos humanos que han surgido y que tienen al igual que las organizaciones civiles, la causa de los derechos de los más desprotegidos, estamos hablando de los organismos públicos de defensa de los derechos humanos.

En un primer momento analizaremos su origen y posteriormente evaluaremos qué han hecho estas instituciones para impulsar, proteger y defender los derechos humanos de forma integral.

ANTECEDENTES

Los antecedentes institucionales más remotos de la defensa de los derechos humanos en México se encuentran en la Ley de la procuraduría de los pobres de 1847 que don Ponciano Arriaga promovió en San Luis Potosí, la cual tenía el objetivo de auxiliar a las familias más desprotegidas y desamparadas.

En el siglo XX, a partir de la década de los años 70s se crearon organismos públicos que tenían como finalidad proteger los derechos de los gobernados frente a la administración pública o a la administración de justicia, por ejemplo, el

3 de enero de 1979 el entonces gobernador del Estado de Nuevo León, doctor Pedro G. Zorrilla creó la Dirección para la Defensa de los Derechos Humanos.

Otro ejemplo se dio en Colima el 21 de noviembre de 1983, año en que se fundó la Procuraduría de vecinos por acuerdo del Ayuntamiento de la Ciudad capital, situación que dio origen al establecimiento de esa figura jurídica en la Ley Orgánica Municipal de Colima el 8 de diciembre de 1984, constituyéndose en el antecedente para su creación en los demás municipios del Estado y el 29 de mayo de 1985 se estableció la defensoría de los derechos universitarios en la Universidad Nacional Autónoma de México.

En el ámbito local se habían desplegado en el país esfuerzos para la defensa de los derechos humanos sin que se advierta una mejoría sustantiva en el respeto de los mismos, tales son los casos de la Procuraduría de la Defensa del indígena en Oaxaca en 1986 y la Procuraduría de Derechos Humanos en el Estado de Guerrero en 1987.

Al inicio de la administración de Carlos Salinas de Gortari y una vez instalado en el poder, buscó de muchas maneras legitimarse ante la opinión pública, con hechos tan espectaculares como la detención de Joaquín Hernández Galicia alias "La Quina" famoso líder sindical de los petroleros.

Es interesante observar cómo los derechos humanos no eran un tema sustantivo al inicio de la administración Salinista, prueba de ello es que al revisar el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, en ninguna parte del mismo se observan políticas de Estado a seguir, para la protección de los mismos derechos, así que cuando Salinas de Gortari explicó durante la ceremonia de inauguración de la Comisión Nacional de Derechos Humanos... *"por ser partes esenciales de nuestro lenguaje político compartido y una constante de nuestra historia, la vigencia permanente de los derechos y las libertades de nuestro territorio son objetivo de la reforma del Estado, meta que da sentido al crecimiento sostenido, propósito de*

la ampliación de nuestra vida democrática y condición indispensable para elevar el bienestar de la población. Por eso, la defensa de los derechos humanos es entrar en la modernización...” (Mazcott Sánchez, 1995). Este es un discurso que se iba adecuando a las necesidades de legitimar al Estado y no como una real aplicación de los derechos humanos en nuestro país.

En primera instancia, el gobierno de la República crea la Dirección General de Derechos Humanos el 13 de febrero de 1989, adscrita a la Secretaría de Gobernación. A esta Dirección se le asignó entre otras funciones, la atención de las demandas ciudadanas por violaciones de los derechos humanos constituyéndose en el antecedente más próximo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos

Diversas organizaciones civiles cuestionaron este esfuerzo por considerar que la nueva oficina gubernamental no daba respuesta a sus demandas planteadas a favor de los derechos humanos, ya que el gobierno se constituía en juez y parte de sus propios actos.

Entre 1989 y 1990, diversos organismos internacionales y nacionales incrementaron sus denuncias sobre la violación de los derechos humanos, acusando al gobierno de no atender eficazmente las denuncias relativas a abusos de los cuerpos policiacos, tortura, detenciones ilegales, abusos de autoridad contra campesinos e indígenas y desapariciones forzadas de disidentes políticos entre otros; estas críticas fueron promovidas principalmente en el ámbito nacional por el comité de presos, perseguidos y desaparecidos políticos, la Academia Mexicana de Derechos Humanos, los centros de derechos humanos Agustín Miguel Pro y Fray Francisco de Victoria y en el ámbito internacional por las organizaciones Human Rights Watch, Amnistía Internacional y el Comité Internacional de Derechos Humanos de los abogados de Minessota.

Elo generó un clima de mayores presiones hacia el gobierno, situación que en el mes de mayo de 1990 se agudizó con el asesinato de la doctora Norma Corona Sapién, presidenta de la Comisión de Defensa de los derechos humanos de Sinaloa ocurrido en Culiacán.

Es en este contexto que el 6 de junio de 1990 se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (12) como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación con atribuciones más amplias que su precedente, sobre todo al intervenir con propuestas de soluciones a los casos recibidos y en la vigilancia del cumplimiento de las normas que protegen los derechos humanos. Sin embargo, las críticas continuaron al considerar que la designación del Ombudsman (13) por el Ejecutivo Federal y la ausencia de una estructura autónoma, generaba una subordinación de funciones lo cual le restaba eficacia y credibilidad a sus acciones.

(12) Publicado en el diario oficial de la Federación del 6 de junio de 1990

(13) Para poder entender lo que significa la palabra Ombudsman, es necesario acudir a las palabras del doctor Hector Fix Zamudio , que en términos generales nos dice que el Ombudsman se conceptualiza como "el organismo autónomo, cuyo titular es designado por el legislativo, por el ejecutivo, o por ambos con la función especial de fiscalizar la actividad administrativa; recibir las reclamaciones de los administrados, gestionar la pronta resolución de las cuestiones planteadas y de no ser posible investigar dichas impugnaciones para que si se considera que se han afectado indebidamente los derechos e intereses legítimos de los propios reclamantes, se formulen las recomendaciones no obligatorias a las autoridades respectivas, con objeto de lograr la reparación de las citadas violaciones, presentar informes públicos especiales y periódicos sobre las cuestiones investigadas y sugerir reformas y modificaciones a las prácticas, los reglamentos y las leyes administrativas, para una mejor prestación de los servicios públicos".

En 1991, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene una reforma aprobada por el Congreso de la Unión el 11 de diciembre de ese año.

Un elemento importante a destacar es la forma en que se fueron dando las discusiones al interior del Congreso de la Unión para dicha reforma, en primer lugar, existía un desconocimiento de lo que significaba proteger y defender los derechos humanos, en segundo lugar, la mayoría del Congreso la tenía el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y por último, realmente no se tenía la intención de dotarla de más autonomía, todo ello derivó en que la Comisión Nacional de Derechos Humanos naciera con grandes acotaciones, prueba de ello son las discusiones que se llevaron a cabo por esas fechas y con este fin analizaremos algunas intervenciones de los diputados que estuvieron en dicha sesión:

Para el diputado Ramírez Cuellar que votó en contra de dicha iniciativa no concebía que la Comisión de Derechos Humanos se encargara solamente de las garantías individuales y dejara de lado la protección de los derechos sociales y por tanto la visión de protección de los derechos humanos sería muy limitada.

Por otro lado, el diputado Jesús Humberto Zanzueta que votó a favor del dictamen, estableció que la correlación de los organismos protectores de los derechos humanos no satisfacen los requerimientos de la sociedad mexicana, dentro de este ámbito restrictivo de los derechos humanos, no afecta en nada al proyecto económico sino que al contrario lo legitima, además de no intervenir en situaciones laborales, como la huelga y el deterioro del salario ya que no permiten llegar a discutir si estos temas son o no violatorios de derechos humanos.

En este sentido, la gran mayoría de las voces en la Cámara de Diputados y de Senadores, que votaron a favor de dicha iniciativa, intentaron reforzar su principio de autonomía e independencia y se sentar las bases y las reglas para la operación del sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos más grande del mundo puesto que no existe un país que cuente con tantas

Comisiones de Derechos Humanos como México, en total 33 Comisiones, empero este intento solo quedó en eso, porque efectivamente no se contempló ampliar su competencia y mantenerla de forma acotada en su funciones, salvo su desincorporación administrativamente de la Secretaría de Gobernación y su funcionamiento como órgano desconcentrado, pocos son los avances que dicha reforma tuvo, todo ello podrá confirmarse en el apartado del marco jurídico que a continuación se presenta.

MARCO JURÍDICO

El marco jurídico que da origen constitucional al surgimiento de las Instituciones Públicas de Defensa de los Derechos Humanos es el siguiente:

El texto constitucional corresponde al artículo 102 apartado B y dice:

“El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad y o servidor público con excepción de los del Poder Judicial de la Federación que violan estos derechos.

Los organismos que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas.

Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales...” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2003).

El texto nos refiere diversas implicaciones que es necesario explicar:

En primer lugar, cuando se refiere a la no vinculación de sus recomendaciones, esto se traduce en que las recomendaciones emitidas por una Comisión no tiene la calidad de ser obligatorias, por tanto si una autoridad no recibe una recomendación o no la cumple o la cumple parcialmente, no existe jurídicamente una norma que la obligue a cumplirla, por tanto la única fuerza que tiene la recomendación es de carácter moral y ético, ya que esta se hace del conocimiento de la opinión pública y se evidencia al servidor público que no la cumpla(14).

Y en segundo lugar, cuando se refiere a la no competencia en asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales, se refiere a que en esos casos la Comisión tendrá que canalizar a los quejosos a las instancias que ya tramitan esos casos, con la consecuente falta de protección de los derechos laborales de los trabajadores, por ejemplo, porque en muchos casos en este rubro es donde más se violentan los derechos sociales con los despidos injustificados, la compactación de horarios, los bajos salarios y la poca o nula atención de la seguridad social de los trabajadores, etc.

(14) A nivel del Distrito Federal, esta implicación de no ser vinculante se ha corregido en parte con la reforma a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 14 de enero del 2003, en la cual se adicionó el art. 65 bis, para que por medio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, citará a comparecer a cualquier funcionario de la administración pública local para que informe las razones cuando no acepte total o parcialmente una Recomendación, si es omisa después de haber transcurrido el termino que señala la Ley para informar si acepta o no dicha recomendación y por último cuando la autoridad responsable no cumpla total o parcialmente con la recomendación previamente aceptada en el plazo señalado.

Las Comisiones de derechos humanos de acuerdo a la Constitución se encargarán de proteger a los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano por tanto, cualquier derecho que sea amparado por la Constitución y las leyes que de ella emanen serán protegidos por las comisiones de Derechos Humanos, además y es necesario explicarlo que en cada una de las Entidades Federativas existe una Comisión de Derechos Humanos incluyendo por supuesto al Distrito Federal.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal fue creada en Septiembre de 1993, el primer Presidente de la Comisión fue designado, al igual que sus antecesores de la CNDH, por el Presidente de la República para el periodo de 1993 a 1997 y para el segundo periodo ya fue designado por la Asamblea Legislativa del D. F., y con ello tener un gran avance en la independencia del Defensor del Pueblo frente al Estado, incluso antes del Ombudsman nacional que lo hizo hasta 1999 (15).

La CDHDF, tiene por objeto *"la protección, defensa, vigilancia, promoción, estudio, educación y difusión de los derechos humanos, establecidos en el orden jurídico mexicano y en los instrumentos internacionales de derechos humanos"* (art. segundo de la Ley de la CDHDF reformado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 14 de enero del 2003.), además, esta comisión será competente para *"conocer de quejas y denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos cuando éstas fueren imputadas a cualquier autoridad o servidor público que desempeñe un empleo, cargo o Comisión local en el Distrito Federal o en los órganos de procuración o de impartición de justicia cuya competencia se circunscriba al Distrito Federal"* (artículo 3º de la Ley de la CDHDF).

(15) Para ampliar este punto es necesario remitirse al estudio de dicha reforma que llevó a cabo Lorena Goslinga Remírez, y otros, editado por la CNDH en el 2002, de la página 225 en adelante citado en las fuentes bibliográficas al final del presente trabajo

Para poder entender el funcionamiento de la Comisión es importante analizar cuáles son los procedimientos internos para luego hacer una evaluación de los resultados obtenidos en relación a la protección de los derechos sociales.

En primer lugar, es importante destacar que *“toda persona podrá denunciar presuntas violaciones a los derechos humanos y presentar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del D.F... ya sea directamente o por medio de un representante...las organizaciones no gubernamentales legalmente constituidas podrán acudir ante la CDHDF para denunciar presuntas violaciones a los derechos humanos”* (artículo 27 de la Ley de la CDHDF).

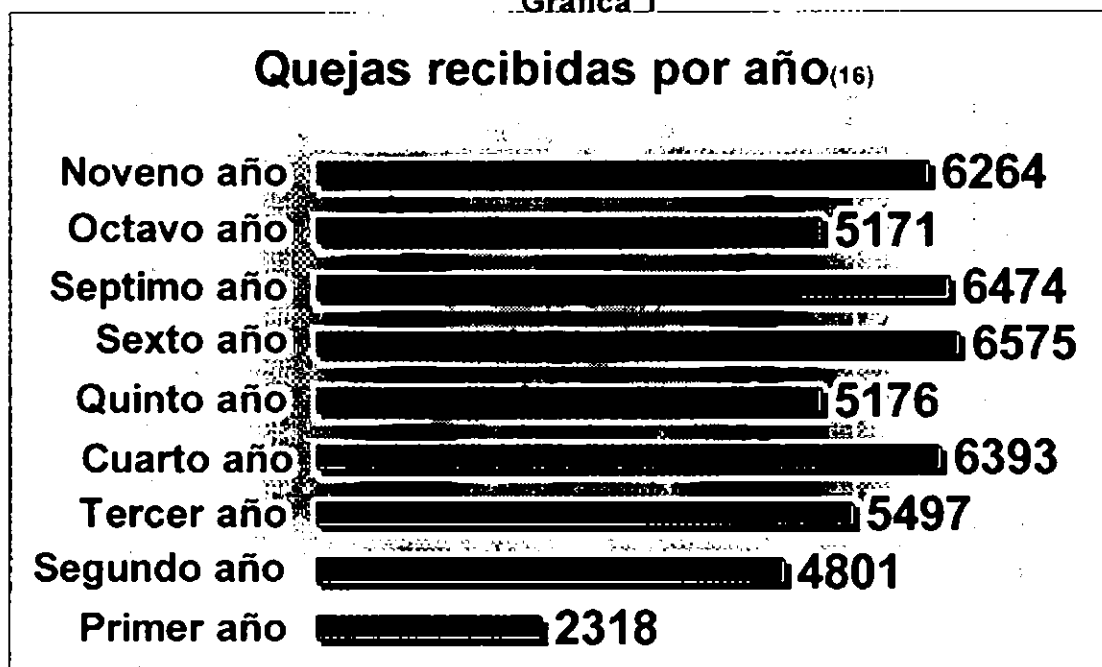
En segundo lugar, es importante destacar que las quejas tienen un año a partir de la fecha en que hubieran sucedido los hechos, salvo cuando se trate de violaciones a los derechos fundamentales, como la vida, la libertad y la integridad física y psíquica de las personas o de lesa humanidad, esto quiere decir que cuando se habla de violaciones graves a los derechos humanos no existe un plazo para denunciarlos.

En tercer lugar, una vez recibida la queja, esta debe contar con todos los elementos necesarios como el nombre, datos de identificación, firma, señalar a las autoridades presuntamente violatorias a los derechos humanos y un breve relato de los hechos, por otro lado, se solicitará a las autoridades involucradas un informe detallado sobre los actos u omisiones que se les atribuyen en la queja teniendo un plazo de 15 días para su contestación.

Es importante establecer en este momento que una queja es un documento que contiene una inconformidad por algún acto u omisión que algún servidor público o autoridad del Distrito Federal ha hecho en contra de alguna persona y que con ello se presume una violación a los derechos humanos.

En este sentido, y para analizar a como se han venido comportando algunos números a lo largo de los primeros nueve años de labor (ver grafica 1) : En el primer año se recibieron 2,318 quejas, 4,801 en el segundo, en el tercero hubo 5,497, en el cuarto ejercicio anual se recibieron 6,393, en el quinto año las quejas sumaron 5,176, en el sexto 6,575, en el séptimo 6,474, en el octavo año 5,171, en el noveno año 6,264, teniendo un total de 48,669 quejas a lo largo de nueve años de servicio, por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (16).

Grafica 1



16) Todos estos datos son tomados de los informes publicados por la Institución, en primer lugar el 8º. Informe anual, octubre de 2000/agosto de 2001, el segundo lugar es Informe anual 2001, del 1º de abril del 2001 al 28 de febrero del 2002 y por último el Informe anual 2002, publicado en abril del 2003, todos ellos editados por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, consultados como fuente bibliográfica básica para cualquier estudio sobre estos temas

Es importante hacer un análisis de los números en cuanto a recepción de quejas por parte de los ciudadanos; en este sentido, las 48, 669 quejas recibidas en nueve años, representan en términos porcentuales tan solo el 54%, si tomamos como base a una población de 9 millones de habitantes aproximadamente, este porcentaje representa una cantidad de personas muy bajo, por tanto podemos deducir que es necesario ampliar el margen de personas que presentan quejas en contra de servidores públicos, ya que no representan las relaciones diarias que se dan entre la población y los servidores públicos, confirmando la poca cultura de la denuncia por parte de la población, todo ello a pesar de los intentos por acercar a la Comisión de Derechos Humanos a la gente, al inaugurar el 24 de marzo de este año la Unidad Oriente de la CDHDF (Para conocer más de este paso importante por parte de la CDHDF favor de remitirse al anexo III de este trabajo), aunque esto no es suficiente, ya que hay que es necesario implementar una política de difusión que tenga como objetivo llegar a más personas y como se propone en este trabajo, ampliar las facultades en materia de derechos sociales.

Por otro lado es necesario establecer la diferencia que se da entre las quejas presentadas y la gente atendida por parte de la Comisión de Derechos Humanos del D.F., para recibir alguna orientación, ya que la propia Ley de la Comisión establece en que no somos competentes para atender determinados asuntos (17).

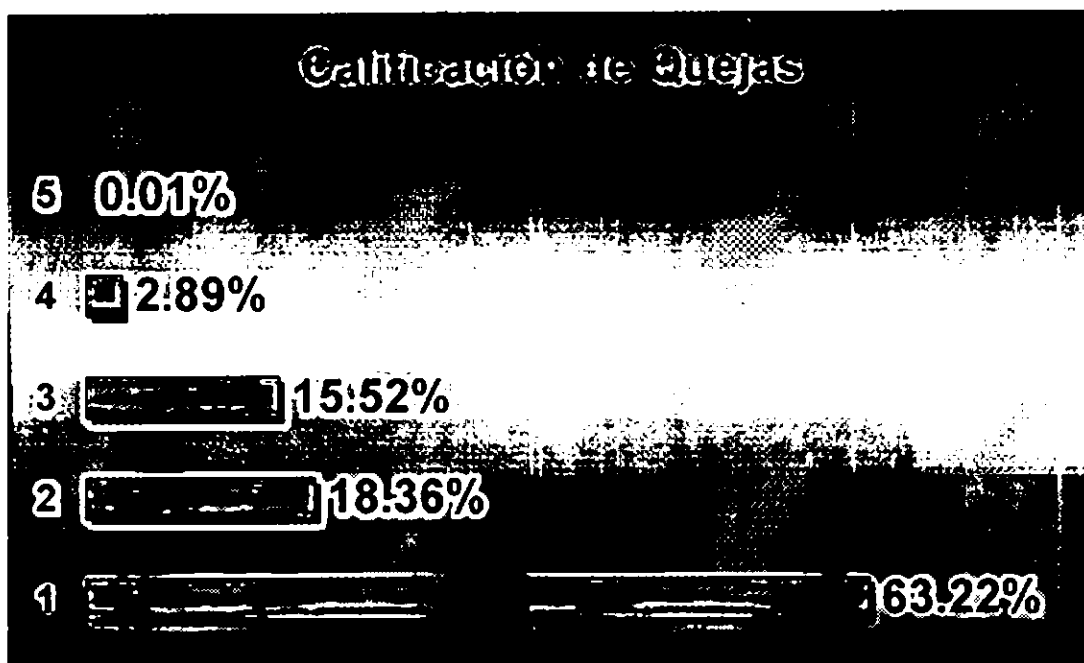
A lo largo de nueve años de gestión la CDHDF, ha atendido a un total de 213,588 personas, contando a las 48,669 personas que presentaron una queja, en este sentido si volvemos a tomar como referencia a los 9 millones de personas, tan solo se han presentado a la Comisión, el 2.37 % de la población total, confirmando la hipótesis anterior de que muy pocas personas se acercan a denunciar un hecho presuntamente violatorio a derechos humanos, además de fortalecer la teoría de que la población no confía en la Instituciones públicas, por tanto la Comisión tiene que trabajar en ello para superar este hecho.

Por otro lado, en la grafica 2, analizaremos los primeros 9 años de labor de la CDHDF, en las ha recibido 48,669 quejas (18) de las cuales el 63.22 por ciento se calificaron como presuntas violaciones a los derechos humanos, el 18.38 por ciento se calificó como no competencia de la comisión, el 115.52 por ciento como inexistencia de violación a los derechos humanos, el 2.89 por ciento se calificó como sin posibilidad de calificar por falta de información del quejoso y por último el 0.01 % se calificó como improcedente. De este gran total la cifra que nos interesa es el 63.22 por ciento de presuntas violaciones a los derechos humanos, por que las vincularemos con las instituciones que más quejas reciben como presuntas violaciones a los derechos humanos.

17) El artículo 33 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal señala: "Cuando notoriamente la queja o denuncia no sea competencia de la CDHDF se proporcionará al quejoso o denunciante orientación a fin de que acuda a la autoridad o servidor público a que corresponda resolver el asunto"

18) Datos publicados por la CDHDF. Ver Bibliografía

Grafica 2



En este sentido las Instituciones Locales con más quejas presuntas violaciones de derechos humanos en los últimos nueve años son: En primer lugar la Procuraduría General de Justicia del D.F. , en segundo lugar el Gobierno del Distrito Federal, incluyendo la SSP y la Dirección General de Reclusorios y por último el Tribunal Superior de Justicia del D.F., lo que nos viene a confirmar que la gran cantidad de quejas se enfocan a la protección y defensa de los derechos individuales y no se enfocan a la protección de los derechos colectivos, muestra de ello es la tabla siguiente.

Los tipos de denuncia más frecuentes alegados por los quejosos son los siguientes: (véase Cuadro 3*)

Cuadro No. 3*

Tipos de Denuncia más frecuentes	No. De denuncias
Deficiencias en la procuración de justicia	7,011
Ejercicio indebido del Servicio Público	6,667
Negativa o suspensión o prestación ineficiente del servicio público	4,901
Violación a los derechos de los reclusos	4684
Lesiones	2,628
Detención arbitraria	2,444
Negativa al derecho de petición	1,647
Robo	1,435
Cohecho	1,020
Amenazas	751
Negación de atención médica	224

Haciendo un análisis de la información obtenida en el cuadro No. 3 (19), podemos resaltar algunos puntos, en primer lugar el tema de la procuración de justicia es una constante a lo largo de los 9 años de trabajo de la Comisión, fundamentalmente en todo lo relacionado con el Ministerio Público y las averiguaciones previas iniciadas por éste, en segundo lugar, el ejercicio indebido del servicio público tiene que ver con la gran impunidad con la que trabajan los servidores públicos ya que en muchos casos realizan actos que van en contra de la función que tienen encomendada y en estos casos es muy difícil que sean sancionados y en tercer lugar, pero no menos importante para este análisis en el presente ensayo es que los diez casos más recurrentes de quejas no se observa que exista quejas por violaciones a los derechos sociales por parte del gobierno de la ciudad de México, por no existir explícitamente en la Ley de la CDHDF un apartado o que toda la Ley sea transversalmente tocada por los derechos desde una forma integral esto es protegiendo los derechos individuales y sociales.

(19) El total de las quejas presentadas que es de 48,669 no corresponde al total del cuadro no. 3 que es de 33,412 ya que en el, solamente se toman a los tipos más frecuentes de denuncia y no a todos.

En este sentido, estos elementos hasta ahora presentados, nos centra en el debate de la falta de respuesta de los organismos públicos de defensa de los derechos humanos, en este caso de la CDHDF, en relación a la protección de los derechos sociales, además de que la propia sociedad capitalina no denuncia este tipo de hechos ante la Comisión y no se ha formado una cultura de denuncia ante las constantes violaciones a los derechos sociales por parte del gobierno de la ciudad.

Por otro lado, y continuando con el proceso interno que sigue una queja al interior de la Comisión, el siguiente paso consiste en llevar a cabo una investigación lo más extensa posible y con todos los elementos periciales y de criminalística necesarios para corroborar si existe o no una violación a los derechos humanos en el caso de que exista, la CDHDF, puede emitir un documento llamado Recomendación.

La recomendación, es la última arma y la más fuerte para poder evidenciar frente a la opinión pública cualquier acto u omisión de la autoridad y que ha atentado contra los derechos humanos de las personas, este documento contiene toda una investigación y un análisis de la situación jurídica de los hechos para concluir en una recomendación o sugerencia a la autoridad para que en un tiempo adecuado pueda instrumentar las medidas pertinentes para, en primer lugar, sancionar conforme a la ley a las autoridades responsables, en segundo lugar, resarcir de sus derechos a las personas víctimas de la violación y por último evitar que estos hechos se sigan cometiendo.

Para evitar que las recomendaciones de una Comisión pierdan fuerza y dejándolas para los casos en los que se hace necesaria su publicación existe el proceso llamado de conciliación en las cuales ambas partes pueden establecer un punto de acuerdo para salvar la posible violación a derechos humanos, esto es posible siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo y siempre que la

violación a los derechos humanos no sea una violación grave a la vida, a la integridad, a la libertad o de lesa humanidad.

En este sentido, al ser la recomendación el arma más importante que tiene una Comisión, es necesario que hagamos una revisión de las emitidas por la CDHDF y analizar a cuáles han sido las instituciones que más se han recomendado y cuáles son los derechos que más han violentado.

Recomendaciones emitidas de Octubre de 1993 a Enero del 2003

Cuadro No. 4

Año de emisión	Recomendaciones
1994	12
1995	16
1996	9
1997	17
1998	4
1999	9
2000	10
2001	10
2002	13
2003	0
Total	100
(20) Hasta enero del 2003	

(20) Fuente Noveno informe Anual 2002, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, abril del 2003

En el cuadro No.4 observamos cómo a lo largo de 9 años la CDHDF ha emitido 100 recomendaciones siendo este un número muy bajo, sobre todo si lo comparamos con las 48,669 quejas calificadas como presuntamente violatorias de derechos humanos, cabe hacer mención especial el año 1998 en donde se emitieron cuatro recomendaciones, muy por debajo de la media que es de 11 en promedio anual, de lo cual se puede inferir que fue el en este sentido, que al ser el primer año de la segunda gestión de la antigua administración, el uso de las recomendaciones fue de manera totalmente arbitraria y políticamente manejado, ya que a partir de 1997 se inicio un proceso en el cual la Asamblea Legislativa tomo parte de la designación del Defensor del Pueblo, así que en el primer año de gestión de Luis de la Barrera, parecería ser que simplemente utilizó las recomendaciones para saldar cuentas políticamente hablado, con las fuerzas políticas que permitieron su reelección, cosa que es totalmente contraria a los fundamentos de una Institución que busca permanecer al margen de vaivenes políticos.

Por otro lado, es importante analizar una por una cuáles han sido las instituciones a las cuales se ha recomendado:

Cuadro No. 5 (21)

Autoridades a quienes se han dirigido las recomendaciones emitidas de 1994 al 2002	
Autoridades	Recomendaciones
Procuraduría General del Justicia del Distrito Federal	43
Secretaría de Seguridad Pública	16
Dirección General de Prevención y Readaptación Social	13
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal	11
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal	10
Secretaría de Salud	9
Secretaría de Gobierno	6
Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal	6
Delegación Iztapalapa	3
Secretaría de Transportes y Vialidad	2
Otras	9

(21) Fuente Noveno Informe anual de la CDHDF, abril del 2003. El número total de recomendaciones no concuerda con el número total de recomendaciones ya que algunas recomendaciones involucran a más de dos autoridades

El análisis del cuadro No. 5 y de las tablas de las Recomendaciones (Ver anexo II) nos indica las siguientes conclusiones:

En primer lugar, la mayoría de ellas han sido emitidas para instancias de la procuración, administración de justicia y de seguridad pública confirmando con ello la mínima protección de los derechos sociales por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

En segundo lugar, observamos como a lo largo de nueve años se ha sostenido el promedio de recomendaciones emitidas en 10 al año, salvo el año de 1998 explicado anteriormente, este número de recomendaciones hace establecer que *se ha establecido un mínimo a cumplir aunque no haya los casos necesarios para recomendar, haciendo recomendaciones realmente sin fundamento, y que en muchos casos las autoridades no aceptan o tardan más en aceptarla.*

En tercer lugar, un tema que es necesario establecer y que los cuadros de recomendaciones del anexo II nos presenta, es la recurrencia de los casos de afectación a la integridad física, en donde se ven involucradas autoridades, asuntos tan graves como la tortura o los golpes, sobre todo en los Centros Penitenciarios (22), en los cuales con gran impunidad los custodios y técnicos penitenciarios solicitan, por ejemplo, cinco pesos para pasar la lista diaria, si esta pequeña cantidad no es proporcionada, ellos mismos o por intermedio de otros internos son gravemente lesionados.

(22) Si se tiene intereses de acercarse a este tema le recomendamos consultar el Diagnóstico Interinstitucional del Sistema Penitenciario en el D.F., en el que participaron el Gobierno del Distrito Federal, el Tribunal Superior de Justicia del D.F., la Asamblea Legislativa del D.F. y la propia Comisión, una síntesis del mismo lo podemos encontrar en el Noveno Informe anual, CDHDF, abril del 2003.

En cuarto lugar, *de las 100 recomendaciones emitidas hasta enero del 2003, solamente se han emitido 11 recomendaciones que tienen que ver con la protección de los derechos sociales y en la mayoría de ellas se observan casos de negligencia médica o de negativa en la prestación de servicios de salud* (las recomendaciones que están en este rubro se observan con negritas en los cuadros el anexo II), por sólo en uno de los casos (recomendación 4/99) se observa la protección del derecho al trabajo en el caso de un particular que denunció la inconsistencia de la Junta de Conciliación y Arbitraje en la resolución de un fallo, situación más de carácter procedimental que de una real protección al derecho al trabajo.

Por último, todos estos casos, se enmarcan dentro de la protección a los derechos en base a mejorar la calidad de los servicios, por lo tanto el tercer aspecto se refiere precisamente a la eficiencia de los servicios que presta el gobierno y eliminar el burocratismo, aunque en primera instancia esto es positivo, es necesario ampliar ese marco y proteger a los derechos fundamentales y los derechos sociales de una manera más amplia.

En este sentido el papel que juegan las Instituciones nacionales de protección a los derechos humanos en particular la del D.F., que es el tema que nos ocupa, muy importante, sobre todo porque estas instituciones son absolutamente necesarias para contribuir a forjar una cultura de paz, respeto a los derechos humanos, de armonía social y de justicia social.

Por lo tanto, es necesario establecer nuevos modelos de protección efectiva de los derechos sociales, entre otros, con la propuesta de una modificación a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en la cual pueda incidir en políticas públicas para la protección a los grupos sociales más desprotegidos, tema que se analizará en el capítulo siguiente.

CAPITULO IV

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LA LEY DE LA CDHDF PARA HACER EXIGIBLES LOS DERECHOS SOCIALES ANTE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL D.F.

Con la necesidad de incidir en la política social de la capital del país y hacer que los derechos sociales adquieran un carácter más obligatorio, y que las autoridades de la Ciudad de México, tomen en cuenta lo que los organismos públicos de defensa de los derechos humanos tienen que decir en torno a la protección de los derechos sociales, que están incluidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los ordenamientos internacionales se propone:

**COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA ASAMBLEA
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
II LEGISLATURA**

**PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE PROPONEN MODIFICAR
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL.**

HONORABLE ASAMBLEA

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado C, base primera, fracción V, inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracción XII del Estatuto de Gobierno y 10, fracción I, 46 fracción II, 47, 48 fracción I, 50 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los Diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, II Legislatura, presentamos al pleno de este Órgano Legislativo, el Dictamen con Proyecto de Decreto de Reforma y Adiciona diversos Artículos de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal con base en los siguientes:

CONSIDERANDOS

1.-Es importante destacar la importancia de adecuar la Ley de la Comisión de Derechos Humanos a las necesidades de protección de los derechos sociales, incluidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tan castigados en los últimos años, así como adecuarla a los ordenamientos internacionales en esta materia.

2.-Los organismos públicos de derechos humanos son piedra angular en un Estado de derecho, ya que sus fines y acciones tienden a generar equilibrios para evitar el abuso del poder y lograr de la autoridad, el acatamiento de la norma, buscando siempre el respeto a la dignidad de la persona.

3.-La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal tiene por objeto la protección, defensa, vigilancia, promoción, estudio, difusión y educación de los derechos humanos establecidos en el orden jurídico mexicano, teniendo su ámbito de competencia la Ciudad de México, esta protección abarca todos los derechos humanos incluyendo por supuesto los derechos sociales de los habitantes de la capital.

4.-Se hace necesario que los organismos encargados de la defensa de los derechos humanos evolucionen y se modernicen, para poner un freno a las conductas omisivas, negligentes e indebidas en las que llegan a incurrir algunos servidores públicos en la protección de los derechos sociales.

5.-Que para cubrir las necesidades que tal fin se propone, es necesario dotar a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de mayores facultades que le permitan incidir en las políticas públicas de nuestra capital, sobre todo en las encargadas de la protección de los derechos sociales y lograr con ello que dichas políticas sociales sean de mayor alcance y verdaderas políticas de Estado.

6.-Que la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, conforme junto con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y otros ordenamientos jurídicos nacionales y locales, un amplio y verdadero marco de protección a los derechos sociales.

7.-Que la idea de hacer fortalecer a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en el combate a la violación a los derechos humanos y sabiendo que las Recomendaciones que emita no son vinculatorias y que su única fuerza es moral y la presión social, es necesario dotar de facultades a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para citar a cualquier funcionario de la administración pública local, para que explique las razones por la que determinada política social se ha implementado y ver el alcance que dicha política tiene y si esta no afecta en la protección a los derechos sociales de la población de la capital.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, resuelve:

Primero y único.- Que presenta al pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, II Legislatura, EL PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los derechos humanos al ser interdependientes e indivisibles es necesario que se tomen como un todo y por lo tanto es necesario protegerlos y defenderlos tanto a nivel individual como social.

La visión social de nuestro país y especialmente de nuestra ciudad, en relación al respeto a los derechos humanos, no concuerda con la necesidad de que sean protegidos desde todas las ópticas posibles, incluyendo por supuesto la que nos brindan las Instituciones Nacionales de Protección y defensa de los derechos humanos.

En este sentido, es importante destacar que a pesar que la Ley es el sustento para la protección de dichos derechos, también es cierto que la aplicación dista mucho de ser eficaz y suficiente para cubrir con los estándares mínimos que a nivel internacional en materia de derechos sociales se han establecido.

Uno de los sustentos más importantes en materia de los derechos humanos es la dignidad humana, no podemos soslayar la importancia de que los derechos sociales tiene como un fin en si mismos, en el respeto de la dignidad humana en materia social, preservando los mínimos indispensables para vivir dignamente.

El Estado de derecho es aquel que respeta y reconoce nuestros derechos vigentes, cuyo objetivo es que la sociedad y sus habitantes logran una mejor calidad de vida y de mejores oportunidades para su progreso de vida.

En este orden de ideas, se considera que los organismos públicos de derechos humanos son piedra angular en un Estado de Derecho, ya que sus acciones tienen la finalidad de generar equilibrios en la desigualdad social, evitar abusos de autoridad y estar pendientes de las políticas públicas de los Estados para garantizar los mínimos estándares en materia social establecidos internacionalmente.

La Comisión de Derechos Humanos en su carácter de Institución de Estado, y no de Gobierno, nació casi una década, y tiene por objeto la protección, defensa, vigilancia, promoción, estudio, difusión y educación de los derechos humanos establecidos en el orden jurídico mexicano, teniendo como ámbito de competencia en esta Ciudad Capital.

Sin embargo, la Ley no protege adecuadamente a los habitantes de la Ciudad de México, en materia de derechos sociales, propiciando confusiones, sobre el origen de este organismo público, considerándose imprescindibles ciertos

cambios, a fin de dotar de mayores elementos para ser un órgano más vigilante en materia de política social.

En virtud de que dicha reforma no viene acompañada de una reforma en materia federal, es necesario asentar que para hacerse más amplia esta protección de los organismos protectores y defensores de derechos humanos en materia de política social, es necesario incidir en el Congreso Federal para hacer las modificaciones pertinentes a nivel federal.

En otro orden de ideas, nuestra Constitución señala que los tratados Internacionales signados y ratificados por México son Ley Suprema, que en materia de derechos sociales nuestro país ha firmado y ratificado varios pactos y convenciones internacionales en los términos establecidos en el Artículo 133 Constitucional, y por ende, su contenido es de obligado cumplimiento, sin embargo se observa que en la practica cotidiana, estos instrumentos no aterrizan y no se observan y por lo tanto, pese a ser derecho positivo no es vigente; Por ello se faculta, a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para que haga recomendaciones en materia de respeto a los Derechos Sociales, a que se refieren estos instrumentos.

Uno de los avances de la anterior Ley de la Comisión de Derechos Humanos, es lo referente a la comparecencia de las autoridades y servidores públicos, que con actitudes evasivas o de entorpecimiento no colaboran con la misma en diversas investigaciones que tiene a su cargo, de la misma manera es necesario citar a comparecer a las autoridades correspondientes para determinar el motivo de haber llevado a cabo determinada política social y hacer caso de las recomendaciones que en esa materia ha tenido la Comisión de Derechos Humanos.

Es por ello, que esta Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, somete a consideración del pleno de este H. Cuerpo Colegiado el siguiente proyecto de:

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

Bajo el siguiente tenor:

PRIMERO Y ÚNICO: Se reforman los artículos 3, la fracción XI del artículo 17, la fracción VIII del artículo 20, la fracción X del artículo 22, se reforma el artículo 23, se reforma el artículo 27.

Para quedar como sigue:

Artículo 3.-La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal será competente para conocer de quejas y denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos de forma integral, esto es tanto a nivel individual como social, imputadas a cualquier autoridad o servidor público que desempeñe un empleo, cargo o Comisión local en el Distrito Federal o en los órganos de procuración o de impartición de justicia cuya competencia se circunscriba al Distrito Federal.

Artículo 17.-...

I a X

XI.- Formular programas y proponer acciones en coordinación con las dependencias competentes, para impulsar el cumplimiento de los tratados, convenciones, acuerdos internacionales, signados y ratificados por México en materia de derechos humanos, tanto a nivel individual como social. Para ello, elaborará y actualizará de manera constante, una recopilación de dichos documentos, que divulgará de manera amplia entre la población.

XII a XIV

Artículo 20.-...

I a VII...

VIII.- Proponer a la o el Presidente todas las acciones y medidas que sirvan para una mejor observancia y tutela de los derechos humanos en el Distrito Federal, sobre todo en relación a las políticas de carácter social que se implementan en la ciudad y que pueden afectar a determinados grupos sociales, sobre todo a los más desprotegidos, y

IX...

Artículo 22.-...

I a IX...

X.- Formular propuestas generales conducentes a una mejor protección de los derechos humanos tanto en su aspecto individual como social, en el Distrito Federal.

Artículo 23.- El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal podrá llevar a cabo reuniones con organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos legalmente constituidas, a fin de intercambiar puntos de vista sobre los objetivos de la Comisión y analizando las políticas públicas implementadas en la Ciudad, sobre todo en lo referente a los derechos sociales de los grupos más desprotegidos, considerando al efecto el listado que de las mismas integre dicha Comisión.

Artículo 27.-....

.....

Las organizaciones no gubernamentales legalmente constituidas, cuyo objeto principal sea la defensa de los derechos humanos, podrán acudir ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para denunciar las presuntas violaciones a derechos humanos tanto en su aspecto individual como social.

CAPITULO V

CONCLUSIONES

Para concluir esta investigación es necesario hacer una breve acotación, este proyecto tiene la finalidad de hacer un análisis y *poner en la mesa del debate a los organismos públicos de defensa de los derechos humanos en la protección de los derechos sociales como parte fundamental de los derechos humanos*; seguramente, hará falta muchos más variables que discutir y por supuesto hacer un análisis más amplio de estos temas; sin embargo, este es un primer acercamiento y como tal debe ser tomado.

Una de las conclusiones a la que llegamos en primer lugar es que a lo largo de la historia se han establecido a los derechos sociales con una *visión programática y no como parte fundamental de los derechos humanos* (23), por eso nuestra primera conclusión es que debemos tomar a los derechos sociales como derechos fundamentales y parte necesaria en la protección de los derechos humanos.

En segundo lugar, sería importante impulsar las reformas necesarias para que en la asamblea legislativa se estableciera un mínimo del proyecto de egresos del Gobierno del Distrito Federal en la protección de los derechos sociales, así, y en el caso de que exista una crisis económica el porcentaje asignado no se disminuya sino por el contrario que por ley exista una progresividad en el monto asignado para que así año con año el monto a la seguridad social sea incrementado.

(23) Cuando hablamos de visión programática de los derechos humanos, se refiere a que de acuerdo a las posibilidades de los Estados, los derechos sociales se van proteger, si las posibilidades económicas y los progresos económicos así lo permiten.

Cuando nos referimos a los derechos fundamentales nos referimos a los derechos tanto en su carácter individual y social, que son necesarios para la subsistencia de los individuos en sociedad.

En tercer lugar, hemos analizado cómo los derechos sociales por muchos años fueron la base de la legitimidad del régimen y durante mucho tiempo se hacía una gran apología de estos derechos, situación que poco a poco fue cambiando y hoy no son la prioridad en el gobierno federal, prueba de ello son las múltiples cifras plasmadas a lo largo de la investigación en donde se observa una disminución constante de la protección a los derechos sociales. Es por todo ello necesario idear nuevas y variadas formas de protección a los derechos sociales, tanto de Organismos No Gubernamentales como el que las propias Comisiones de Derechos Humanos asuman un papel relevante en la protección de estos derechos.

En este sentido, si las comisiones tienen como mandato constitucional el proteger los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, esto significa que hay que proteger absolutamente todos los derechos incluidos por supuesto los derechos sociales; por tanto, se propone superar la visión restrictiva de la protección de los derechos individuales en todas y cada una de las comisiones de derechos humanos y ampliarlo a la protección de los derechos humanos en una forma más integral, incluyendo en estos a los derechos sociales.

Así mismo, es necesario insistir por medio de las ONGs que protegen los derechos sociales para que las comisiones de derechos humanos acepten y tramiten quejas en torno a estos temas y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal podría ser la pionera en aceptar estas quejas y dar una muy buena imagen a nivel nacional e internacional y con ello sentar un precedente muy importante en la protección de estos derechos por ejemplo, qué sucedería si una comisión de derechos humanos emite una recomendación a la autoridad responsable para que evite violar los derechos sociales de la población, esto sin duda sería un gran avance en esta propuesta.

Por otro lado, es necesario responder a esta pregunta ¿cómo hacer para que el Estado cumpla estas obligaciones en la protección de los derechos sociales?

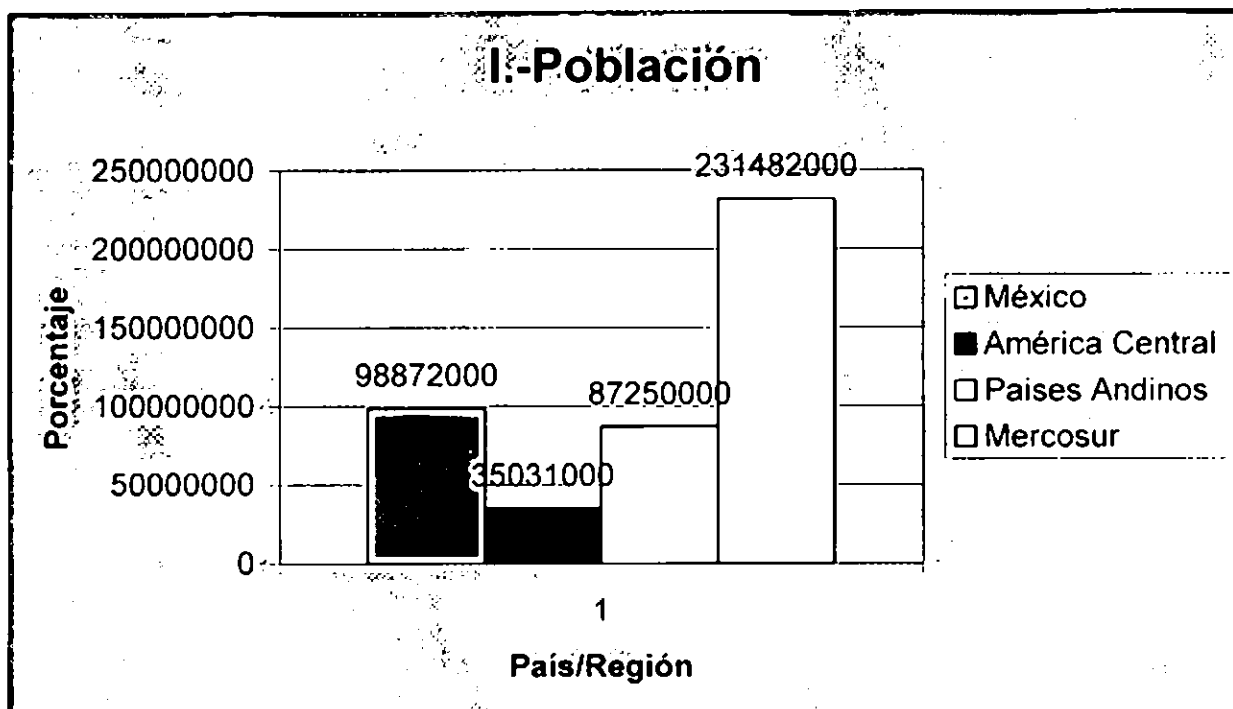
Es necesario establecer un proceso de exigibilidad, en el que se inicie un proceso tanto social, político y legal, para que el Estado cumpla con sus obligaciones, además de que es necesaria la participación activa de la sociedad civil; Si esta exigibilidad se lleva a rango de lo jurídico a este proceso se llama de Justiciabilidad e implica la defensa de los derechos violados ante tribunales o las propias Comisiones de Derechos Humanos, en otro tenor la exigibilidad Política se da a través de incidencias en políticas públicas y programas gubernamentales, impulso a las Leyes o reformas, movilizaciones etc., todos estos fueron propuestos en la Declaración de Quito (24), y nuestra propuesta en este ensayo tiene que ver con la exigibilidad jurídica en el ámbito de las Comisiones de Derechos Humanos y de hacer una protección más efectiva usando las instancias ya existentes, sin necesidad de crear nuevas y que eso sea otro pretexto para su no protección.

Por último es necesario insistir ante los organismos no gubernamentales y la sociedad organizada para presentar ante los órganos jurisdiccionales, esto es, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juicios de amparo en contra de decisiones del ejecutivo por la disminución de los presupuestos asignados a la protección de los derechos sociales, sustentando dichos juicios en documentos nacionales e internacionales firmados y ratificados por México, como por ejemplo el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales para así formar una cultura en los órganos jurisdiccionales de respeto a los derechos sociales.

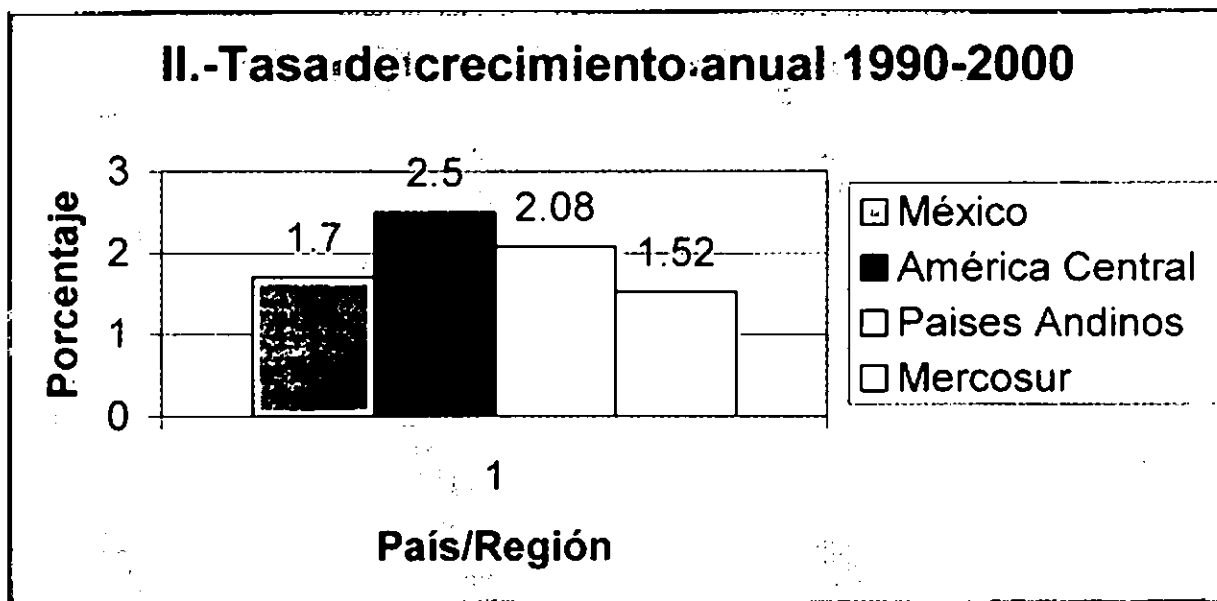
(24) La declaración de Quito sobre los principios de exigibilidad y realización de los derechos sociales en América Latina, proclamada el 24 de julio de 1998 por las redes de ONG's de Derechos Humanos, de promoción y desarrollo, de organizaciones sindicales, de pueblos indígenas y de defensa de los derechos de la mujer, reunidos en la Ciudad de Quito Ecuador, durante el primer Encuentro Latinoamericano sobre Exigibilidad de los Derechos Sociales (22 al 24 de julio de 1998) en el que participaron organizaciones nacionales.

ANEXO I

GRAFICAS DE INDICADORES NUMÉRICOS DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS SOCIALES EN MÉXICO FRENTE A AMERICA LATINA

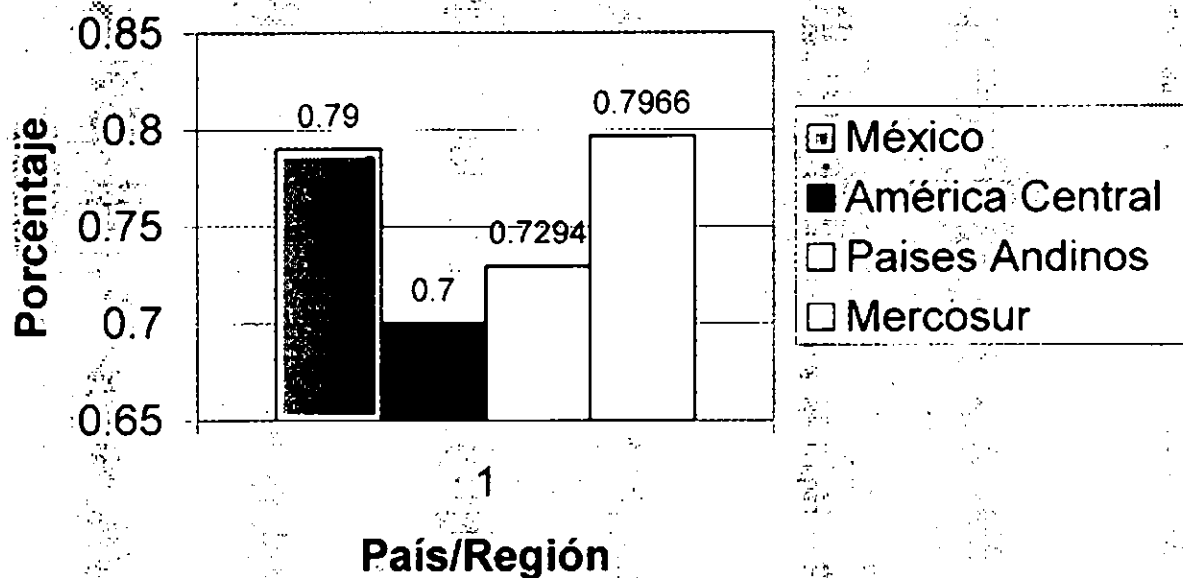


Fuente: Informe sobre la salud en el mundo, OMS, 2001.



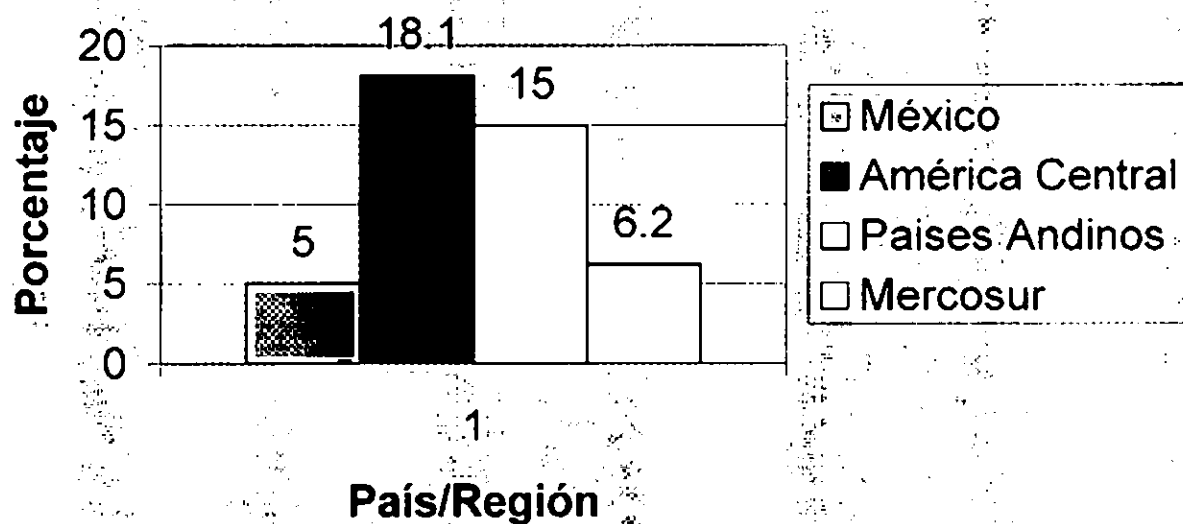
Fuente: Informe sobre la salud en el mundo, OMS, 2001.

III.- Índice de desarrollo humano



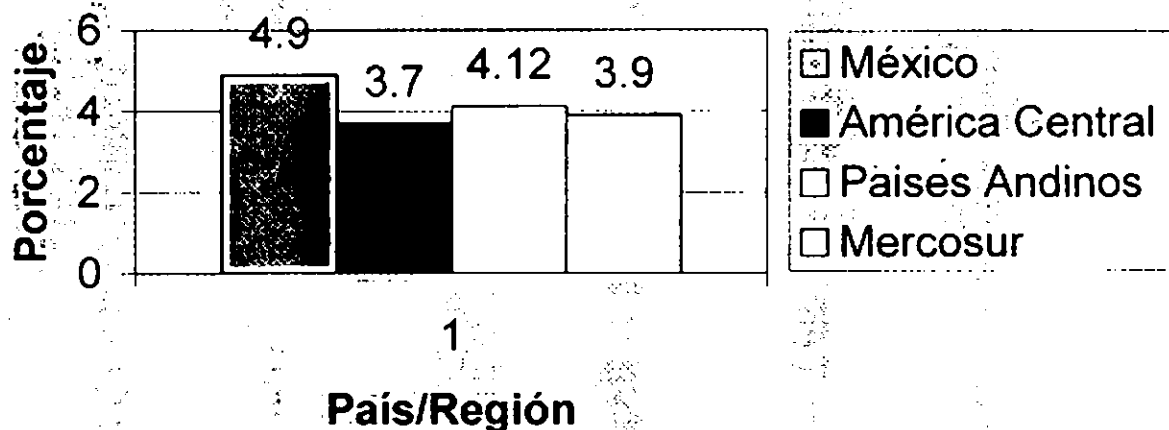
Fuente: Informe sobre desarrollo humanos PNUD, 2001

IV.- Porcentaje de desnutrición



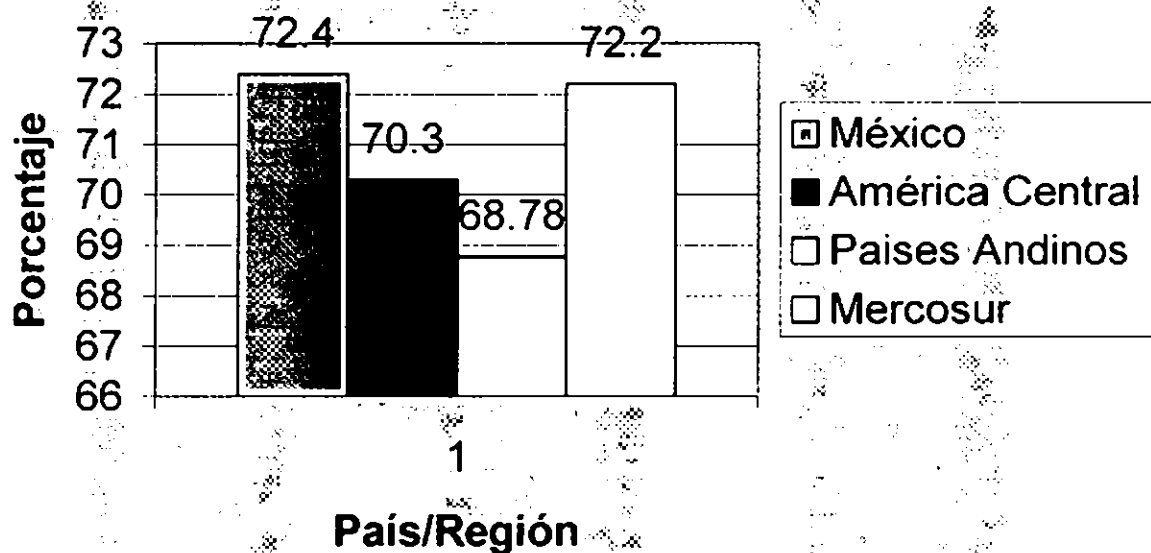
Fuente: Informe sobre desarrollo humanos PNUD, 2001

V.- Porcentaje del PIB destinado a la educación

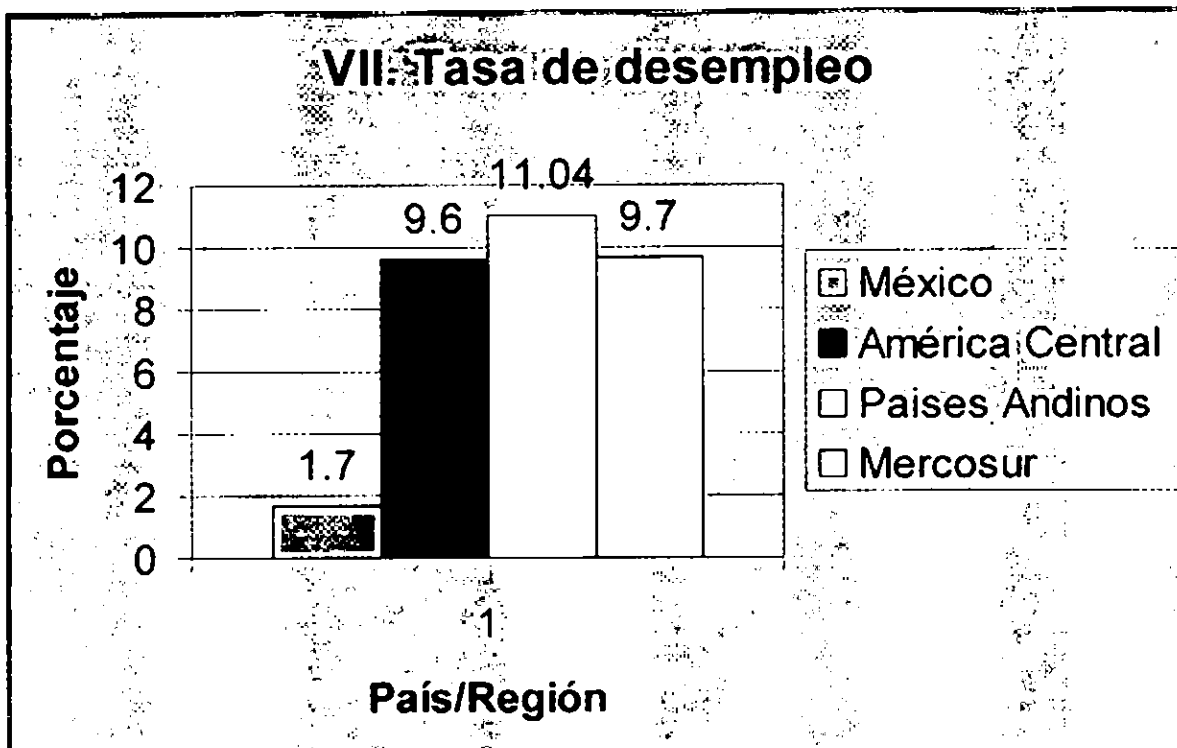


Fuente: Informe sobre desarrollo humanos PNUD, 2001

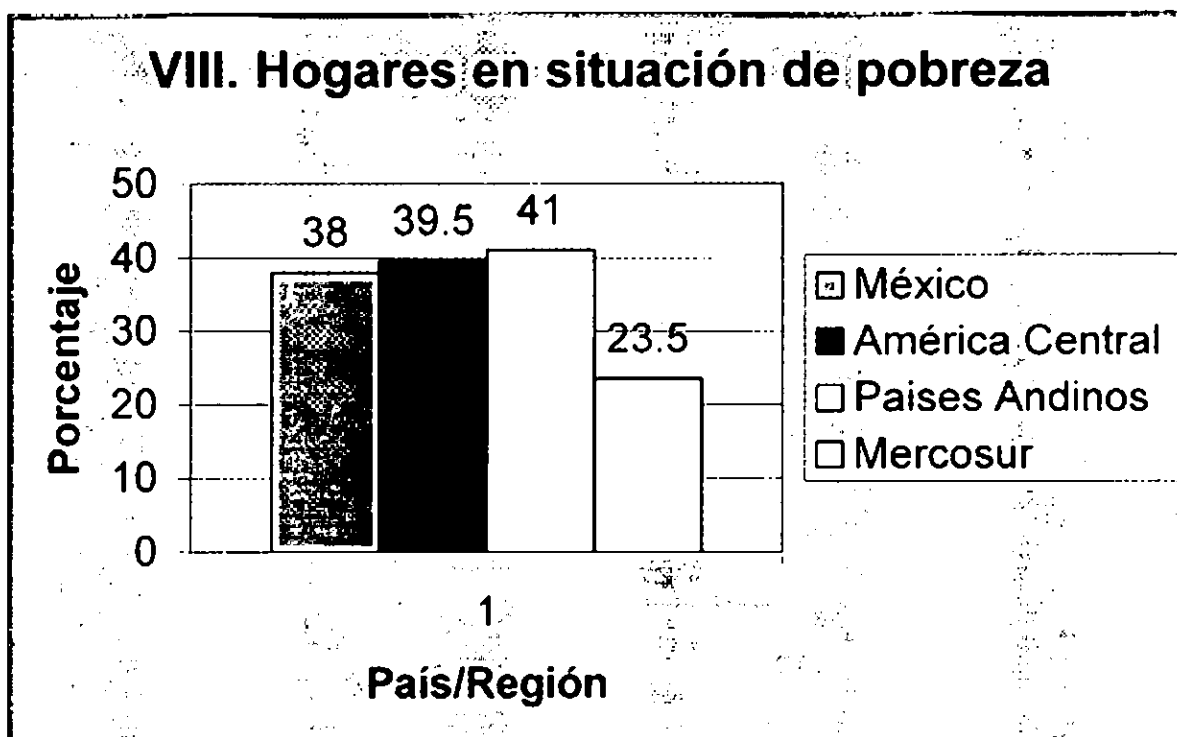
VI.- Esperanza de vida al nacer



Fuente: Informe sobre desarrollo humanos PNUD, 2001

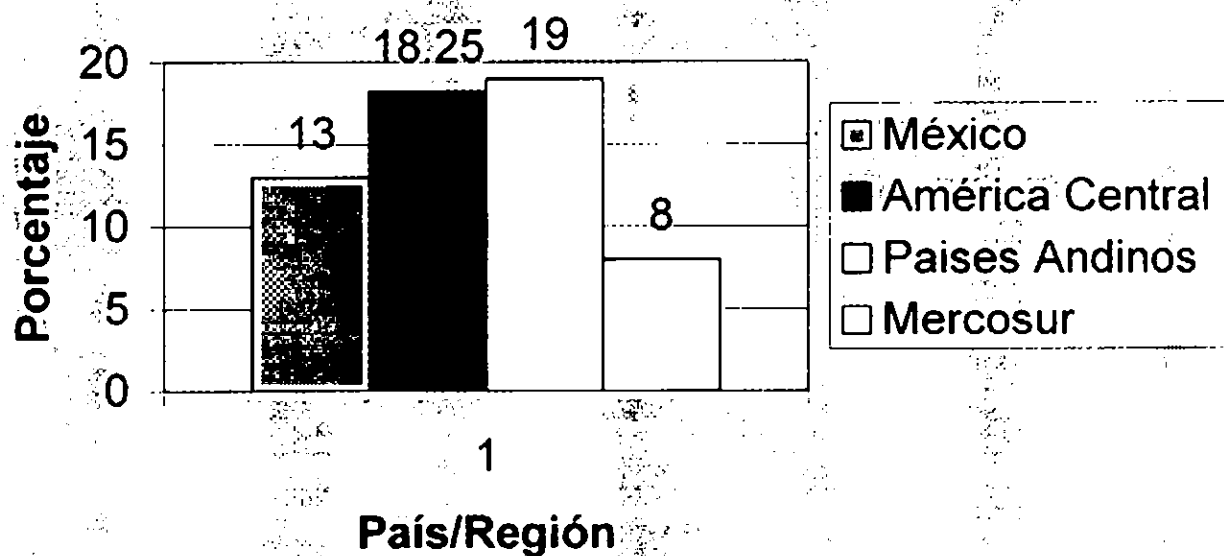


Fuente: Informe sobre desarrollo humanos PNUD, 2001



Fuente: Informe sobre desarrollo humanos PNUD, 2001

IX. Hogares en situación de indigencia



ANEXO II

**RECOMENDACIONES EMITIDAS DE 1994 AL 2003 POR LA COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL**

1994

Nº. Recomendación/Año	Autoridad responsable	Caso	Derecho vulnerado
1/94	PGJDF y SGPyV	Tortura	Integridad física
2/94	PGJDF	Omisión en una orden de aprehensión	Dilación en la procuración de justicia
3/94	PGJDF	Desestimiento de acción penal por detención arbitraria	Libertad
4/94	DDF	Tasas excesivas en la Nacional Monte de Piedad	Justicia
5/94	DDF/DGR y CRSDF	Violencia excesiva en los Centros penitenciarios	Integridad física
6/94	DDF/DGR y CRSDF	Tortura	Integridad física
7/94	DGR/DGR y CRSDF	Corrupción	Justicia
8/94	PGJDF/SGPyV	Golpes y detenciones arbitrarias	Integridad física
9/94	SGPyV	Arrestos arbitrarios	Libertad
10/94	TSJDF y PGJDF	Detención arbitraria	Libertad
11/94	PGJDF	Detención arbitraria	Libertad
12/94	TSJDF	Dilación en la admón. de justicia	Libertad

1995

N°. Recomendación/Año	Autoridad responsable	Caso	Derecho vulnerado
1/95	PGJDF	Robo de bienes en averiguaciones previas	Propiedad
2/95	PGJDF	Usurpación de funciones	Justicia
3/95	PGJDF	Dilación de la procuración de justicia	Justicia
4/95	PGJDF/SSP	Violación de policías Lesiones a niños de la calle	Integridad física
5/95	DGR y CRSDF	Derechos de los internos zapatistas detenidos	Libertad
6/95	DDF/TSJDF/PGJDF	Mujeres. Constancia de no embarazo p/empleo	Igualdad
7/95	TSJDF	El SEMEFO emitió un fallo incorrecto en una necropsia	Justicia
8/95	DDF	Abuso de autoridad de un juez civico	Igualdad y justicia
9/95	TSJDF	Falsa información de un juez	Admón. de justicia
10/95	PGJDF	Detención arbitraria y tortura	Libertad
11/95	TSJDF/DGR y CRSDF	Detención arbitraria	Libertad
12/95	DGR y CRSDF/DGSDF	Tortura y negligencia en la protección a la salud	*Integridad física y salud
13/95	DDF/SSP	Falta de atención médica a un indigente	* A la salud
14/95	DDF	Desalojo infundado	Propiedad
15/95	PGJDF	Poner en libertad a un presunto delincuente	Justicia
16/95	DGR y CRSDF	Privilegios a internos	Igualdad

1996

N° Recomendación/Año	Autoridad Responsable	Caso	Derecho vulnerado
1/96	PGJDF	Dilación a la procuración de justicia	Justicia
2/96	DGS DDF	Irregularidad en certificados de médicos legistas	* A la Salud
3/96	PGJDF/DDF	Falta de defensa jurídica del defensor de oficio	Justicia
4/96	DDF	Indemnización a un particular por expropiación	Propiedad
5/96	DGS DDF	Deficiencias en los servicios de salud del DDF	* A la Salud
6/96	DGR y CRS DDF	Tortura de custodios	Integridad física
7/96	TSJDF	Violación de derechos procesales de un interno	Justicia
8/96	DDF	Dilación y negligencia de permisos de construcción	Justicia
9/96	DDF	Falta de servicios públicos	Justicia

1997

N° Recomendación/Año	Autoridad Responsable	Caso	Derecho vulnerado
1/97	SSP	Abuso de autoridad por policia preventivo	Integndad fisica
2/97	PGJDF	Tortura	Integndad fisica
3/97	DGR y CRSDF, DGS Salud	Revisiones íntimas abusivas a las internas	*Integridad fisica y a la salud
4/97	PGJDF	Falta de adecuada asistencia legal de inculpadós	Justicia
5/97	DDF	Expropiación sin pago correspondiente	Propiedad
6/97	DGR y CRSDF	Tortura a internos	Integndad fisica
7/97	DGR y CRSDF DGS Salud	Tortura y negligencia médica	*Integridad fisica y a la salud
8/97	DGR y CRSDF	Tortura a internos	Integndad fisica
9/97	TSJDF	Negligencia en la administración de justicia	Justicia
10/97	SSP	Tortura	Integndad fisica
11/97	PGJDF	Tortura	Integndad fisica
12/97	SSP/PGJDF	Abuso de autoridad	Integndad fisica
13/97	PGJDF	Irregularidad en la avenguación previa	Justicia
14/97	SSP	Abuso de autoridad	Libertad
15/97	PGJDF	Ejercicio indebido de acción penal	Libertad
16/97	PGJDF	Deficiencia en la averiguación previa	Justicia
17/97	DDF	Dilación en la entrega de un bien inmueble	Propiedad

1998

N° Recomendación/año	Autoridad responsable	Caso	Derecho vulnerado
1/98	PGJDF	Privación ilegal de libertad y tortura	Justicia e integridad física
2/98	PGJDF	Privación ilegal de libertad	Justicia
3/98	GDF	Homicidio y violencia en cárceles	Integridad física y la vida
4/98	PGJDF	Fallas en la integración de averiguación previa	Justicia

1999

N° Recomendación/año	Autoridad responsable	Caso	Derecho vulnerado
1/99	PGJDF	Fallas en la integración de averiguación previa	Justicia
2/99	PGJDF	Fallas en la procuración de justicia	Justicia
3/99	PGJDF	Tortura	Integridad física
4/99	Junta de Conciliación y Arbitraje	Negligencia administrativa y violaciones procedimentales	*Justicia y trabajo
5/99	GDF	Abusos contra un interno	Justicia
6/99	TSJDF	Violaciones a los procedimientos de un juez	Justicia
7/99	SSP/PGJDF	Tortura	Integridad física
8/99	SSP	Abuso de autoridad	Integridad física
9/99	GDF	Omisión de carácter administrativo	Justicia

2000

N° Recomendación/Año	Autoridad responsable	Caso	Derecho vulnerado
1/2000	S Salud GDF	Atención inadecuada de un interno	*Salud
2/2000	PGJDF	Ejercicio indebido de acción penal	Justicia
3/2000	PGJDF	Funcionamiento de agencias especializadas	Justicia
4/2000	GDF	Funcionamiento de defensoría de oficio	Justicia
5/2000	PGJDF	Inadecuada integración de averiguación previa	Justicia
6/2000	S Salud GDF	Negligencia en la prestación de servicio médico	*A la Salud
7/2000	PGJDF	Tortura	Integridad física
8/2000	PGJDF	Dilación en procuración de justicia	Justicia
9/2000	PGJDF	Dilación en integrar averiguación previa	Justicia
10/2000	GDF	Negligencia en integración de proced. Aditivo.	Justicia

2001

N° Recomendación	Autoridad responsable	Caso	Derecho vulnerado
1/2001	GDF	Medidas contra microbuseros	Seguridad
2/2001	S Salud GDF	Negligencia médica de un interno	* A la Salud
3/2001	GDF	Funcionamiento de juzgados civiles	Justicia
4/2001	GDF	Regulación de taxis	Justicia
5/2001	SSP	Restitución de policía destruido	Justicia
6/2001	GDF	Negativa de instalación de servicios	Justicia
7/2001	PGJDF/DGR	Dilación en la procuración de justicia y detención arbitraria	Justicia
8/2001	GDF	Irregularidad en la renta de lanchas	Propiedad y justicia
9/2001	GDF	Calidad de chalecos antibalas de la SSP	Integridad física
10/2001	TSJDF	Ineficiencias en las instalaciones de los tribunales	Justicia

2002

N° Recomendación	Autoridad responsable	Caso	Derecho vulnerado
1/2002	S Salud GDF	Negativa de intervención quirúrgica a una interna	* A la Salud.
2/2002	Sria De Gob. Del D F	Irregularidades en los beneficios de libertad anticipada	Justicia.
3/2002	SSP	Violación a la integridad física	Integridad física
4/2002	PGJDF.	Violación a la integridad y seguridad personal	Justicia
5/2002	PGJDF y Sria. De Gob.	Detención arbitraria y tortura	Integridad física y Justicia.
6/2002	SSP y PGJDF.	Omisión para evitar el linchamiento de tres personas.	Integridad física y Justicia
7/2002	Sria DE Gob. y PGJDF	Lesiones a un interno por parte de un custodio.	Tortura y dilación en la procuración de justicia.
8/2002	SSP y PGJDF.	Detención arbitraria y discriminación a un grupo de indígenas Mixtecos.	Discriminación y Procuración de Justicia
9/2002	SSP	Lesiones a un particular por parte de policías auxiliares	Lesiones y ejercicio indebido del servicio público
10/2002	Sria De Gob. del D F	Violaciones a los derechos de los reclusos	Negativa de visita y violación a los derechos de los reclusos.
11/2002	Del. Magdalena Contreras	Afectación de predios y de la salud de colonos por parte de una empresa privada.	Violación a un recurso efectivo. * A la Salud.
12/2002	PGJDF	Tortura a un presunto inculpaado del delito de secuestro.	Integridad física y garantías judiciales.
13/2002	PGJDF y TSJDF	Detención arbitraria, incomunicación y tortura	Integridad física y garantías judiciales

2003*

N° Recomendación	Autoridad responsable	Caso	Derecho vulnerado

(25) Hasta febrero del 2003 no se ha publicado ninguna recomendación.

(25) Estas recomendaciones son importantes porque tienen que ver con derechos sociales, aunque es importante destacar que la gran mayoría se encaminaban a modificar situaciones de carácter administrativo y no de derechos sociales en sentido más amplio y como se ha venido analizando en el presente ensayo

ANEXO III

(NOTA PERIODISTICA)

México, D.F., 24 de marzo de 2003

ACERCAR MÁS LOS SERVICIOS DE LA CDHDF A LA POBLACIÓN, OBJETIVO DE SU PRIMERA OFICINA REGIONAL, EN IZTAPALAPA

Con la inauguración de su primera Oficina Regional (unidad Oriente), en Iztapalapa, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) fortalece su proyecto de convertir este organismo en una auténtica Defensoría del Pueblo, al acercarse a los habitantes de la ciudad y lo hace en una de las demarcaciones con mayor índice de población, con el menor ingreso por familia y de donde provienen una de cada cuatro quejas que recibe la Comisión.

En la ceremonia de apertura de estas instalaciones de atención al público, el presidente de la CDHDF, Emilio Álvarez Icaza, destacó el apoyo recibido por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para concretar este proyecto, el cual es parte del rediseño institucional que privilegia a las personas cuyos derechos presumiblemente han sido atropellados por algún servidor público. Ante el delegado en Iztapalapa, René Arce Islas, la diputada Lorena Ríos, representante de la legisladora Patricia Garduño, y el director general de Quejas y Orientación, Jaime Calderón, Álvarez Icaza mencionó que esta primera oficina acercará los servicios de información, atención y orientación de derechos humanos en esa zona de la capital, además de impartir cursos, talleres y seminarios que fomenten una cultura de esta materia en la ciudad, posteriormente se instrumentará el programa de derechos humanos, a través del levantamiento de quejas que presenten los habitantes del área, así como de cualquier otra demarcación.

Indicó que en los próximos años, la Comisión espera abrir tres unidades más en las delegaciones Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón y en los linderos de las delegaciones Xochimilco y Coyoacán, mismas que cubrirán las zonas norte, poniente y sur, respectivamente. Dicho acercamiento con la población contribuirá a mejorar la defensa y promoción de los derechos humanos en esta ciudad y así la CDHDF podrá constituirse como un referente de todo ciudadano a quien le sean vulnerados sus derechos.

En esta oficina integrada por ocho módulos de atención al público, un vestíbulo, un auditorio, y un aula de capacitación para los cursos y talleres que se ofrecerán principalmente a servidores públicos de la región, trabajarán 12 personas coordinadas por la licenciada Norma López García, fundadora de la CDHDF, cuya experiencia fue destacada por la asambleísta Lorena Ríos. La legisladora, quien acudió en representación de Patricia Garduño, presidenta de la Comisión de Gobierno de la ALDF, expresó su deseo porque esta oficina sea la primera de otras más, que se puedan instalar en demarcaciones como la Gustavo A. Madero, donde se registra un alto índice de denuncias. Antes del acto inaugural, funcionarios de la Comisión, acompañados por representantes de la Comunidad Europea, Naciones Unidas, y servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), de la Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de la República (PGR), de la Dirección General de Reclusorios y de organizaciones civiles, realizaron un recorrido por las instalaciones, guiados por el Director General de Quejas y Orientación de la Comisión, Jaime Calderón.

La primera Oficina Regional Unidad Oriente de la Comisión está ubicada en calle Cuauhtémoc N° 6, colonia Barrio San Pablo, entre las avenidas Rojo Gómez y Ermita Iztapalapa y los números telefónicos a los que se puede comunicar el público son: 56861230, 56861540 y 56862087.

BIBLIOGRAFÍA

1. Antología. Programa de educación en los valores de la paz y los derechos humanos. Compilado por Greta Papadimitriou Cámara, AMNU e ILCE. México agosto del 2000.
2. Carbonell, Miguel. La Constitución en serio, Multiculturalismo, Igualdad y Derechos Sociales, Editorial Porrúa y UNAM, México 2001, 272 pp.
3. Carbonell, Miguel, Juan Antonio Cruz Parceró y Rodolfo Vázquez, Compiladores, Derechos Sociales y derechos de las minorías, segunda edición, Editorial Porrúa y UNAM, México, 2001, 446 pp.
4. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Editorial Alco, México 2003, 157 pp.
5. Cordova, Arnaldo. La Revolución y el Estado en México, Editorial Era, México 1989.
6. De la Cueva, Mario. Síntesis del Derecho del trabajo en México en panorama del Derecho Mexicano, Editorial UNAM, México 1965.
7. Diario de debates, derechos del pueblo mexicano, México a través de sus constituciones. t. X
8. Ferrajoli, Luigi. Derechos y Garantías. La ley del más débil. Editorial Trotta, Madrid 2001, 180 pp.
9. Fix-Zamudio Héctor. Protección Jurídica de los Derechos Humanos, Estudios comparativos, Editado por la CNDH, México, 1999.
10. Gordon R., Sara. Del universalismo estratificado a los programas focalizados. Una aproximación a la política social en México en Sehteingart, Martha (Coordinadora), Políticas sociales para los pobres en América Latina, Miguel Ángel Porrúa, GURI, México 1999
11. Goslinga Remírez, Lorena, et al, Evolución del marco normativo del Ombudsman nacional mexicano: 1990-2000, Editado por la CNDH, México, 2002.
12. Kymlicka, Will. Ciudadanía Multicultural, Una teoría liberal de los derechos de las minorías. Editorial Paidós, México 1996, 333 pp.
13. Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 14 de enero del 2003.
14. Los derechos económicos, sociales y culturales, una revisión del contenido esencial de cada derechos y de las obligaciones del Estado por Areli Sandoval Terán, Deca Equipo Pueblo, México, 2001
15. Mascott Sánchez, María de los Ángeles. Legitimidad y derechos humanos. El caso mexicano Tesis para obtener la licenciatura en Relaciones Internacionales. Colegio de México, 1995
16. Mendieta y Núñez, Lucio. El Derecho Social, Editorial Porrúa, México 1963.

17. Meyer, Lorenzo. *La segunda muerte de la Revolución Mexicana*, Editorial Cal y Arena, México, 1992.
18. Molinar Horcasitas, Juan. *El tiempo de la Legitimidad, Elecciones, Autoritarismo y Democracia en México*, Editorial Cal y Arena, México 1991.
19. Octavo Informe Anual, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Octubre 2000/Agosto 2001, México septiembre 2001.
20. Pardo, María del Carmen. *El cuestionamiento al modelo de desarrollo y la política social en Revista del Colegio de México, Ciencia Política y Administración Pública*, Año IV, no. 6, primer semestre de 1996.
21. Peces-Barba Martínez, Gregorio. *Los Derechos económicos, sociales y culturales, su génesis y su concepto en Revista Derechos Liberales No. 6 Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, Universidad Carlos III de Madrid. BOE. Madrid, febrero 1998.*
22. Quintana Roldan, Carlos y Sabido Peniche, Norma. *Derechos Humanos*, Editorial Porrúa, México 1998, 477 pp.
23. Reglamento interno de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 1º. De agosto del 2002. Nota. (Este reglamento se está discutiendo y saldrá publicado uno nuevo a raíz de las modificaciones del 14 de enero del presente año.)
24. Walzer, Michael. *Las esferas de la Justicia. Una defensa del pluralismo y la igualdad*. Editorial FCE, México 1997, 333 pp.

Investigación elaborada por: **José Tapia Pérez**. México, D.F., julio del 2003